

Febrero 8 de 1962

62ª REUNION — 6ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia de los doctores JOSE MARIA GUIDO y ATAULFO PEREZ AZNAR, presidente provisional y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales del Honorable Senado, respectivamente

Secretario: señor CLAUDIO A. MAFFEI

Prosecretarios: señores CESAR ALBERTO RODRIGUEZ y DELFOR W. CARESSI

SECRETARIO DE ESTADO PRESENTE:

de Hacienda.

doctor Jorge WEHBE

SENADORES PRESENTES:

ARANA, Tomás Pedro
AZAR, Moisés
BAYOL, Augusto G.
BAZÁN, Eduardo
BEASCOCHEA, Raúl Enrique
BERTÍN, Alfredo Felipe
BÉRTORA, José María Antonio
BIAIN, Pablo
CIARLOTTI, Pedro
DÁVILA, J. Anibal
DE LLAMAS, Enrique V.
FIGUEROA, Héctor Enrique
GALLO, Victorio Manuel
GENTILI, Carlos
GUIDO, José María
LEBRERO, Carlos Alberto
LOSADA, Mario
MIGUEL, Pedro H.
NOGUEIRA, Eduardo
OLMEDO, Rolando
OPORTO, Julio S.
PALACIOS, Alfredo L.
PEREZ AZNAR, Ataulfo
RACEDO, Lucio Eduardo
TARANTINO, Carlos Nicolás
TRUNSKY, Salomón
VERA BARROS, Pedro César

VICCHI, Adolfo A.
VILCHEZ, Martín
VILLALBA, Lucas
ZUBASTI, Eusebio

AUSENTES, CON AVISO

CALDERÓN, Segundo Rosa
CORTE, Rolando
FALCO, Clodomiro
GARCÍA, Alfredo
GUZMÁN, Benjamín
JUÁREZ, José Gregorio
LEAVY, Napoleón Tomás
MAJLUF, Amado
MALLEVILLE, Julio A.
PARRA PÉREZ, Diego
PÉREZ, Bartolomé
SANCHEZ, Franklin Alberto

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 3138.)
- 2.—Asuntos entrados:
 - I.—Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se prorroga el período de sesiones extraordinarias. (Página 3138.)
 - II.—Decreto de la Presidencia del Honorable Senado por el que se cita a sesión extraordinaria para el día 8 del corriente a las 16 y 30. (Página 3139.)
 - III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la contri-

bucón para socorrer a las víctimas de las inundaciones producidas en el año 1958. (Página 3139.)

IV.—Comunicación oficial. (Página 3139.)

V.—Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 3139.)

VI.—Dictámenes de comisión. (Página 3139.)

VII.—Proyecto de resolución del señor senador Vicchi sobre interpelación al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto. (Página 3140.)

VIII.—Proyecto de ley del señor senador Bayol sobre modificación del artículo 3º de la ley 11.662 (Fondo permanente de la Biblioteca del Congreso). (Página 3140.)

IX.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Lebrero y Azar sobre exención del recargo de importación a los aviones introducidos en el país por entidades aerodeportivas. (Página 3141.)

3.—Moción del señor senador Vicchi para que se considere sobre tablas el proyecto de resolución que figura en el punto VII de los asuntos entrados. Se rechaza. (Página 3141.)

4.—A moción del señor senador Bayol se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley que figura en el punto VIII de los asuntos entrados. (Página 3146.)

5.—A moción del señor senador Dávila se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. (Página 3146.)

6.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, por el que se dona una fracción de terreno al Club Atlético Estudiantes, de la Capital Federal. Se aprueba. (Página 3147.)

7.—Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley del señor senador Pérez por el que se otorga un subsidio al Aero Club de Río Gallegos. Se aprueba. (Página 3148.)

8.—Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley del señor senador Pérez sobre otorgamiento de subsidio a los clubes deportivos Boxing e Hispano-Argentino, de Río Gallegos. Se aprueba. (Página 3149.)

9.—Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en la modificación introducida por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley referente al artículo 9º del Estatuto del Docente. Se aprueba. (Página 3149.)

10.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre reformas al régimen impositivo. Se aprueba. (Página 3151.)

11.—Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Página 3179.)

—En Buenos Aires, a los ocho días del mes de febrero de 1962, siendo las 17 y 30:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Dávila. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Dávila. — Propongo que se continúe llamando a sesión durante una hora más.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Guido). — Habiendo asentimiento, se continuará llamando a sesión durante una hora más.

—Siendo las 18 y 35:

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Guido). — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados, los que han sido girados a las comisiones respectivas, de acuerdo con lo resuelto por la Honorable Cámara.

Sr. Secretario (Maffei). — (Leyendo):

I

Prórroga del período de sesiones ordinarias. — Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 31 de enero de 1962.

Al Honorable Senado de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad llevando a su conocimiento, en copia autenticada, el texto del decreto 1.040, dictado en el día de la fecha, por el que se prorroga hasta el 10 de febrero próximo, inclusive, el período de sesiones extraordinarias a que fue convocado el Honorable Congreso por decreto 169/62.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO FRONDIZI
Alfredo R. Vitolo.

Buenos Aires, 31 de enero de 1962.

En uso de la atribución conferida por el artículo 86, inciso 12, de la Constitución Nacional,

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Prorrógase hasta el 10 de febrero del corriente año, inclusive, el período de sesiones extraordinarias a que fue convocado el Honorable Congreso de la Nación por decreto 169, de 9 de enero en curso.

10

REFORMAS AL REGIMEN IMPOSITIVO

Sr. Presidente (Guido). — Corresponde tratar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre reformas al régimen impositivo.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley en revisión, sobre reformas al régimen impositivo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 6 de febrero de 1962.

José María Antonio Bértora. — Moisés Azar. — Eusebio Zubasti.

En disidencia parcial:

Mario Losada. — Adolfo A. Vicchi.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(31 de enero de 1962)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Procedimiento

Artículo 1º — Modifícase la ley 11.683 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones) en la siguiente forma:

- 1º Inclúyese en el tercer párrafo del artículo 8º, entre las facultades del director general, la de dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes.
- 2º Sustitúyese el párrafo 5º del artículo 14 por el siguiente:

La dirección sólo quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio:

- a) Cuando se trate de cambio a un domicilio real o legal, si la notificación de dicho cambio ha sido hecha por el contribuyente en la forma y condiciones que ella establezca;
- b) Cuando se trate de cambio a un domicilio especial, en el caso de que el cambio haya sido expresamente aceptado por ella.

- 3º Sustitúyese el artículo 23, por el siguiente:

Artículo 23. — Al ejercer las facultades de verificación la dirección procederá a emplazar al contribuyente para

que en el término de 15 días, prorrogable a su pedido, presente declaraciones juradas o, si las hubiera presentado, ratifique o rectifique su contenido, aportando en ambos casos los libros, registros y comprobantes de los datos denunciados.

Si las conclusiones de la fiscalización llevada a cabo no concordaran con las resultantes del emplazamiento previsto en el párrafo anterior, corresponderá que la dirección proceda a determinar de oficio la obligación impositiva, sea en forma directa por el conocimiento cierto de la materia imponible, sea mediante estimación si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.

Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los impuestos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos (artículos 10 y 11).

- 4º Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:

Artículo 24. — El procedimiento de determinación de oficio se iniciará con una vista al contribuyente de las impugnaciones o cargos que se formulen, para que en el término de quince (15) días, que podrá ser prorrogado, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho.

Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, se dictará resolución fundada que determine el impuesto e intime su pago dentro del plazo de quince (15) días.

La contestación a la vista previa y los recursos que se interpongan ante la Dirección General Impositiva, deberán ser presentados por escrito en los lugares que al efecto habilite la misma.

El decreto reglamentario establecerá en forma expresa los requisitos que, a los fines de su validez, deberán reunir los escritos que presenten los contribuyentes o responsables.

No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación impositiva si antes de ese acto prestase el contribuyente su conformidad con la liquidación que hubiese practicado la dirección, la que surtirá entonces los mismos efectos que una declaración jurada.

5º Sustitúyese el artículo 26, por el siguiente:

Artículo 26. — Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley.

La determinación del juez administrativo del impuesto, en forma cierta o presuntiva, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos:

- a) Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior;
- b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros).

6º Sustitúyese el artículo 28, por el siguiente:

Artículo 28. — Podrá la dirección exigir, dentro del período fiscal en curso, el ingreso de importes a cuenta del impuesto que se deba abonar al término de aquél. Estos anticipos podrán ser fijados proporcionalmente a la fracción transcurrida del período fiscal y sobre la base del impuesto correspondiente al período inmediato anterior o bien en base a otros índices, tales como rentas, capitales, ventas, importe de suministros o inversiones.

7º Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

Artículo 33. — Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a que se refieren la dirección determinará a cuál de las obligaciones no prescritas deberán imputarse los pagos o ingresos.

En los casos de prórroga por obligaciones que abarquen más de un ejercicio, los ingresos, en la parte que correspondan a impuestos, se imputarán a la deuda más antigua.

8º Sustitúyese el artículo 42, por el siguiente:

Artículo 42. — Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y 45, la falta total o parcial de pago a su vencimiento de los impuestos, anticipos o ingresos a cuenta hace surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar juntamente con aquéllos, un recargo del 3 % mensual calculado sobre el monto del gravamen adeudado.

La obligación de abonar los recargos subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la dirección al recibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de ésta.

El director general podrá, con carácter general y cuando medien circunstancias excepcionales debidamente justificadas, redimir en todo o en parte la obligación de abonar los recargos. Así mismo, en los casos de ajustes efectuados con intervención de la dirección, podrá autorizar a los jueces administrativos a reducir o dejar de exigir los mencionados recargos, si a juicio de los mismos, la omisión del impuesto debiera atribuirse a error excusable de hecho o de derecho.

Las precedentes disposiciones serán de aplicación para todos los gravámenes no prescritos al tiempo de exigirse el pago de los recargos.

9º Elévanse las multas mínima y máxima previstas por el artículo 43, a \$ 1.000 y \$ 100.000, respectivamente.

10. Derógase el artículo 44.

11. Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

Artículo 45. — Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas de uno hasta diez veces el impuesto en que se defraudó al fisco o se haya pretendido defraudarlo, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes, responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos.

Con igual pena serán reprimidos los agentes de retención que mantengan en su poder impuestos retenidos, después de haber vencido los plazos en que debieron efectuar los respectivos ingresos.

En los casos de multas firmes aplicadas de conformidad con lo dispuesto en este artículo, la Dirección General

Impositiva dispondrá la publicación periódica, por los medios de divulgación que estime adecuados, del nombre, domicilio y actividad de cada infractor y del importe de la sanción impuesta.

12. Agréganse al artículo 46 como incisos g) y h) los siguientes:

g) La omisión, por parte de los responsables, de presentar sus declaraciones juradas e ingresar el gravamen adeudado, cuando de las características del caso tales como: la naturaleza o volumen de las operaciones realizadas, la cuantía de los beneficios obtenidos o la personalidad del infractor, resulte que el mismo no podía ignorar su calidad de contribuyente o responsable y la existencia de las obligaciones emergentes de tal condición;

h) La omisión total o parcial de la obligación de actuar como agente de retención, cuando esa omisión provocar un evidente perjuicio fiscal y concurren las circunstancias agravantes a que alude el inciso anterior.

13. Sustitúyese el artículo 47, por el siguiente:

Artículo 47. — En los casos del artículo 45, cuando la multa a aplicar resultara inferior a mil pesos (\$ 1.000), la Dirección General Impositiva queda facultada para no imponer pena al responsable.

En los supuestos del artículo 43, el juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad.

14. Sustitúyese el artículo 48, por el siguiente:

Artículo 48. — Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los quince (15) días de notificadas, salvo que se hubiera opuesto por interponer contra las mismas las acciones o recursos que autorizan los artículos 71, 75 y 85.

15. Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

Artículo 49. — Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los impuestos, recargos, intereses y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitorio del tres por ciento (3 %) mensual, que se computará desde la fecha de la interposición de la demanda.

16. Sustitúyense los párrafos 1º y 3º del artículo 51, por los siguientes:

No están sujetos a los recargos establecidos por el artículo 42 ni a las multas previstas en los artículos 43 y 45: las sucesiones indivisas, el cónyuge cuyos réditos propios percibe o de que disponga en su totalidad el otro, los incapaces, los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal, los concursados civilmente y los quebrados.

Las sanciones previstas en los artículos 42, 43 y 45 no serán de aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del infractor, aun cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

17. Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

Artículo 62. — Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

- 1) Desde la fecha de intimación administrativa de pago de impuestos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal la suspensión, hasta el importe del impuesto liquidado, se prolongará hasta sesenta (60) días después de notificada la sentencia del mismo que declare su incompetencia, o determine el impuesto o apruebe la liquidación practicada en su consecuencia.
- 2) Desde la fecha de la resolución condenatoria por la que se aplique multa, con respecto a la acción penal. Si la multa fuere recurrida ante el Tribunal Fiscal, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida hasta sesenta (60) días después de notificada la sentencia del mismo.

18. Elévase de diez (10) a quince (15) días el plazo establecido en el artículo 67 y agrégase, a continuación de la palabra «días» la expresión «que podrá ser prorrogado».

19. Sustitúyese el artículo 73, por el siguiente:

Artículo 73. — Sustanciado el recurso, el juez administrativo dictará resolución dentro del término de sesenta (60) días y la notificará al interesado, con todos sus fundamentos, en la forma dispuesta por el artículo 99 de esta ley.

20. Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 74, por el siguiente:

La reclamación del contribuyente por repetición de impuestos facultará a la dirección, cuando estuvieren prescritas las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y, dado el caso, para determinar y exigir el impuesto que resulta adeudarse, hasta anular el saldo por el que prosperase el recurso.

21. Agrégase al artículo 91, el siguiente párrafo:

La sentencia será apelable cuando el monto por el que prosperen las excepciones sea superior a cuatro mil pesos (\$ 4.000).

22. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 99, por los siguientes:

Artículo 99.— Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etcétera, serán practicadas en cualesquiera de las siguientes formas:

- a) Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad.

El aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente aunque aparezca suscrito por un tercero;

- b) Personalmente, por medio de un empleado de la Dirección General, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiere firmar, podrá hacerlo, a su ruego, un testigo.

Si el destinatario no estuviere o se negare a firmar, dejará igualmente constancia de ello en acta. En días siguientes, no feriados, concurrirán al domicilio del interesado dos funcionarios de la Dirección para notificarlo. Si tampoco fuere hallado, dejarán la resolución o carta que deban entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que la reciba suscriba el acta.

Si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se negare a firmar, procederán a fijar en la puerta de su domicilio

y en sobre cerrado el instrumento de que se hace mención en el párrafo que antecede.

Las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad.

23. Sustitúyese el quinto párrafo del artículo 100, por el siguiente:

El secreto establecido en el presente artículo no regirá:

- a) En cuanto concierne a las publicaciones dispuestas por la parte final del artículo 45;
- b) Para el supuesto de que por desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos;
- c) Para los organismos recaudadores provinciales y municipales, siempre que las informaciones que éstos soliciten estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.

24. Sustitúyese el último párrafo del artículo 110, por el siguiente:

La aplicación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes se regirá por la presente ley, con las limitaciones que establezca la reglamentación.

25. Agrégase en el artículo 122, a continuación de la palabra «designará», la expresión «por sorteo».

26. Sustitúyese en el artículo 123 la expresión «los términos de esta ley» por «los términos de este título».

27. Sustitúyese en el último párrafo del artículo 136 la expresión «hasta en un cincuenta por ciento (50 %)» por la siguiente: «hasta en un ciento por ciento (100 %)».

28. Elévase a treinta (30) días el plazo establecido en la primera parte del artículo 164 y por el artículo 166.

29. Sustitúyese el artículo 165 por el siguiente:

Artículo 165.— La Dirección General Impositiva tendrá derecho a apelar de la sentencia, siempre que el escrito del recurso se acompañare con la autorización escrita para el caso dado, emanada del subsecretario de Hacienda o, en ausencia o impedimento de éste, del director general de impuestos y contribuciones. A ese fin, el director general de la repartición recaudadora presentará al subsecretario o al director general de impuestos y contribuciones, en su caso,

un informe fundado sobre la conveniencia de apelar del fallo del tribunal fiscal.

Concedida la autorización, ésta será válida para todos aquellos casos en que, a través de la sentencia del tribunal fiscal, resulte que se trata de una cuestión estrictamente análoga a la que dio lugar a esa autorización.

30. Agrégase el siguiente artículo:

Artículo ... — La Dirección General Impositiva acordará con los bancos el procedimiento para que éstos devuelvan a sus clientes todos los cheques librados a la orden de la Dirección General Impositiva una vez cancelados y satisfechos los requisitos de orden interno de acuerdo con las prácticas bancarias.

31. Agrégase la siguiente disposición transitoria:

Artículo ... — En los casos de intimaciones notificadas y multas aplicadas que no estuvieran firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, serán de aplicación las normas de recargos y multas contenidas en la legislación anterior.

Con relación a los sobrepagos a los combustibles vencidos y no satisfechos con anterioridad a la promulgación de la presente ley, se aplicarán los recargos que establece el artículo 42 de la misma, en sustitución de los intereses punitivos que establecía el artículo 8º del decreto 7.926/51, a menos que ya se hubiera requerido el pago de estos últimos con respecto a esos sobrepagos.

32. Agrégase a continuación del artículo 171 la siguiente disposición:

Artículo ... — Acuérdate a la Dirección General Impositiva un régimen de autarquía administrativa acorde con las exigencias de la labor que le fija la legislación vigente, a cuyo efecto se faculta al Poder Ejecutivo a establecer las normas pertinentes, debiendo informar oportunamente al Honorable Congreso.

En el régimen que se implante, se autorizará a dicho organismo para extraer directamente fondos de las cuentas recaudadoras, conforme con sus necesidades y con sujeción a los créditos que para cada ejercicio se establezcan en su presupuesto general de gastos.

Así mismo, deberá preverse el funcionamiento de un consejo para que con

las facultades que le acuerde el Poder Ejecutivo, asista al titular de dicha repartición, debiendo preverse entre aquéllas la autorización para redistribuir los créditos de su presupuesto de gastos de cada ejercicio.

Los integrantes del consejo deberán ser argentinos, nativos o naturalizados, de notoria versación y/o experiencia en materia económica, comercial o fiscal, y no podrán ejercer cargo público alguno, salvo la docencia.

Impuesto a los réditos

Art. 2º — Modifícase a partir del 1º de enero de 1962 la ley del impuesto a los réditos, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:

1º Sustitúyese el inciso q) del artículo 19 por el siguiente:

q) Las utilidades provenientes de la venta de semillas de categoría «original», obtenidas por criaderos fiscalizados por la autoridad nacional competente, mediante la aplicación de principios de genética vegetal.

2º Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

Artículo 20. — Las personas de existencia visible residentes en la República tendrán derecho a deducir de sus réditos en concepto de renta no imponible, la suma de treinta y seis mil pesos (\$ 36.000) anuales.

Dicho mínimo no imponible se elevará en doce mil pesos (\$ 12.000) anuales para los contribuyentes que tengan cargas de familia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes residentes en el país que obtengan réditos comprendidos en el artículo 60, superiores a treinta y seis mil pesos (\$ 36.000) tendrán derecho a una deducción adicional igual al excedente de dicha suma y hasta un máximo de ciento veintiséis mil pesos (\$ 126.000) anuales.

3º Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

Artículo 21. — Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus réditos las siguientes sumas en concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican residan en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a treinta y seis mil pesos (\$ 36.000), cualquiera sea

su origen y estén o no sujetas al impuesto:

- a) Doce mil pesos (\$ 12.000) anuales por el cónyuge;
- b) Seis mil pesos (\$ 6.000) anuales por cada descendiente en línea recta varón (hijo, nieto, bisnieto) e hijastro, menor de edad o incapacitado para el trabajo; por cada descendiente en línea recta mujer (hija, nieta, bisnieta) e hijastra; por cada ascendiente (padre, abuelo, bisabuelo) madrastra y padrastra; por cada hermano varón menor de edad o incapacitado para el trabajo y hermana, cualquiera sea su edad; por el suegro o la suegra; y por cada yerno menor de edad o incapacitado para el trabajo, y nuera, cualquiera sea su edad.

Cuando las cargas de familia a que se refiere el inciso b) de este artículo excedan de dos, se admitirá, para el total de esas cargas, una deducción adicional de mil doscientos pesos (\$ 1.200) anuales por cada una. Sin perjuicio de esta deducción, los contribuyentes que tuvieren a su cargo más de tres hijos podrán deducir la cantidad de cuatro mil doscientos (\$ 4.200) anuales por cada hijo que exceda de ese número.

La deducción por cargas de familia sólo podrá efectuarla el o los parientes más cercanos que tengan réditos imponibles.

- 4º Agrégase al inciso l) del artículo 62, como segundo párrafo, el siguiente:

Si se tratare de asesoramiento de carácter exclusivamente técnico-industrial prestado a las explotaciones mineras, empresas de transporte, astilleros navales e industrias manufactureras o de transformación, se presumirá que el 50 % de las sumas abonadas por tal concepto cubren gastos o costos del beneficiario del exterior, debiendo practicar la retención sobre el excedente. En ningún caso el monto a considerar como costo o gasto podrá exceder de los límites que al efecto fije la reglamentación.

- 5º Agrégase al artículo 62, como inciso p), el siguiente:

- p) La contribución dispuesta por el decreto ley Nº 8.509/56.

- 6º Modifícase el artículo 76 en la siguiente forma:

- a) Suprímese del primer párrafo el término «sólo».
- b) Agrégase al segundo párrafo y a continuación de «vocales de las cámaras de apelaciones y jueces» las palabras «y vocales del Tribunal de Cuentas de la Nación».

- 7º Agrégase como inciso c) del artículo 81, primer apartado, el siguiente:

- c) La mitad de las sumas invertidas para la implantación de viñedos y montes frutales.

Impuesto a los beneficios extraordinarios

Art. 3º— Modifícase la ley de impuesto a los beneficios extraordinarios, texto ordenado en 1960, en la siguiente forma:

- 1º Modifícase el artículo 1º, en la siguiente forma:

- a) Exclúyese del segundo párrafo la expresión: «o explotaciones».
- b) Sustitúyese el tercer párrafo por el siguiente:

Quedan exentos los réditos extraordinarios que provengan de la actividad de comisionistas, corredores, rematadores, viajantes de comercio, despachantes de aduana y demás agentes auxiliares del comercio.

- 2º Modifícase el artículo 4º en la siguiente forma:

- a) Sustitúyese el primer párrafo por el siguiente:

Artículo 4º— El capital y reservas libres computables estarán dados por la diferencia existente al final de cada ejercicio entre el activo y pasivo ajustados conforme a la ley del impuesto a los réditos y en la forma que establezca la reglamentación, no admitiéndose las revaluaciones o asignaciones de valores a los bienes del negocio, salvo los casos en que el revalúo sea computable para dicha ley. Cuando el capital así determinado no sea representativo del utilizado en el curso del ejercicio, en virtud de variaciones de importancia producidas en los tres (3) últimos meses del mismo, la dirección o los responsables podrán ajustar el capital computable, proporcionando dichas variaciones en función al tiempo.

b) Suprímese del cuarto apartado la locución «en función al tiempo de su inversión».

c) Derógase el último párrafo.

3º Derógase el artículo 8º.

4º Las modificaciones que se establecen por el presente artículo serán de aplicación a los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1961 inclusive, salvo que se trate de responsables que a la fecha de publicación de la presente ley hubieran cerrado sus ejercicios anuales, quienes podrán optar por liquidar el gravamen de acuerdo con las normas anteriores.

Impuesto a las ventas

Art. 4º — Modifícase, a partir del 1º de enero de 1962, la ley 12.143, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Agrégase al artículo 8º, como inciso f), el siguiente:

f) Los gastos directos de venta que incidan sobre las enajenaciones que los industriales efectúen al menudeo y al público consumidor, en la forma y condiciones que fije la reglamentación.

2º Inclúyese en el artículo 11, inciso a) los jugos puros naturales y concentrados de frutas y como inciso j), el siguiente:

j) Las ventas de maquinaria agrícola.

3º Agrégase el siguiente artículo:

Artículo ... — Las ventas de productos importados tendrán el mismo tratamiento fiscal que las ventas de productos similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de exención; quedando derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos.

Impuestos internos

Art. 5º — Modifícase la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Agréganse en el artículo 14, a continuación del primer párrafo, los siguientes:

Así mismo, cuando se trate de reincidencia en infracciones a las disposiciones del artículo 30 de esta ley y la mercadería sea de procedencia extranjera, podrá la Dirección General Impositiva disponer complementariamente de la multa, la clausura por el término de hasta cinco

(5) días de los locales en que se encuentren las mercaderías en infracción.

A tal efecto, cuando los productos o sus envolturas, etiquetas o envases tengan marcas, leyendas o atestaciones de las que resulte su origen extranjero no se admitirá prueba en contrario en cuanto a ese origen.

Para hacer efectiva la clausura dispuesta, podrá la Dirección General Impositiva requerir por medio del director general o demás funcionarios autorizados expresamente por el mismo, el auxilio de la fuerza pública, el que deberá ser acordado sin demora. En su defecto, el funcionario o empleado policial responsable de la negativa u omisión incurrirá en la pena establecida por el Código Penal.

2º Sustitúyese el artículo 31 por el siguiente:

Artículo 31. — Los cigarros y cigarritos, así como los tabacos que se expendan para ser consumidos en hoja, despallados, picados, en hebra, pulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas y despuntes, tributarán un impuesto que graduará el Poder Ejecutivo en función de la calidad y/o peso de los productos. Este impuesto en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30 %) del precio de venta del fabricante o importador.

3º Deróganse los artículos 32, 33 y 34.

4º Sustitúyense los artículos 107 y 108 por los siguientes:

Artículo 107. — Los hilados de seda de producción nacional o importados, abonarán en concepto de impuesto interno la tasa del diez por ciento (10 %).

Tratándose de tejidos y artículos confeccionados de seda, importados, el impuesto interno al hilado de seda contenido en los mismos se abonará en la forma que establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 108. — En los casos de importadores de hilados de seda que los destinen a producción propia de tejidos, la tasa pertinente se aplicará sobre el monto que resulte de la suma del precio de compra, más todos los gastos aduaneros y portuarios, más los gastos facturados por el despachante, adicionado con el coeficiente de utilidad bruta que fijará periódicamente la Dirección General Impositiva.

En forma similar procederán los importadores de tejidos de seda que los destinen a producción propia de artículos confeccionados, sujetándose además a

las normas que, conforme con lo dispuesto en el artículo anterior, determine el Poder Ejecutivo.

- 5º El Poder Ejecutivo podrá incorporar al régimen del Título I de la ley algunos de los gravámenes que actualmente figuran en el Título II, y viceversa, transformando, en su caso, las tasas específicas en tasas ad valorem, las que en ningún caso podrán exceder del veinte por ciento (20 %) del precio de venta.
- 6º Los productos importados gravados por la ley, tendrán el mismo tratamiento fiscal que los productos similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de exenciones; quedando derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos.

- 7º Sustitúyese el artículo 66 por el siguiente:

Artículo 66. — Salvo las exenciones dispuestas por leyes especiales las entidades aseguradoras legalmente establecidas o constituidas en el país pagarán un impuesto del diez por ciento (10 %) sobre las primas de seguros que contraten, excepto los seguros sobre riesgos personales, accidentes del trabajo y responsabilidad civil por daños a personas, que pagarán un impuesto del 4 %. Los contratos de seguros de exportación pagarán el 9 % y los de importación el 8½ % sobre las primas. Los seguros de vida, y de accidentes personales, individuales o colectivos estarán exentos, así como también los seguros contra riesgos que afecten la agricultura y la ganadería.

- 8º La modificación dispuesta por el apartado anterior entrará en vigencia dentro del régimen y los términos de la ley 14.390 a partir del momento en que todas las provincias adhieran a dicha modificación, derogando los impuestos locales de sellos sobre todas las operaciones de seguros y reaseguros y obligándose a no establecerlos en lo sucesivo. En la misma oportunidad quedará derogado el impuesto de sellos nacional sobre dichas operaciones con el mismo alcance.

- 9º Agrégase como capítulo IX del título II lo siguiente:

Artículo 113. — Los productos que a continuación se enumeran, de fabricación nacional o extranjera, pagarán en concepto de impuestos internos las siguientes tasas:

- a) Las bebidas gasificadas, no alcanzas específicamente por otros impuestos internos, que no estén elaboradas con un 10 % como mínimo de jugos o zumos de frutas o sus extractos naturales, diez por ciento (10 %);
- b) Los refrescos en general, quince por ciento (15 %);
- c) Los jarabes, extractos o concentrados no derivados de la fruta aptos para la preparación de las bebidas sin alcohol, quince por ciento (15 %).

Los fabricantes de las bebidas de los incisos a) y b) tendrán derecho a computar como pago a cuenta del impuesto correspondiente, el quince por ciento del importe de la compra de los jarabes, extractos o concentrados sujetos al impuesto del inciso c), utilizados como materia prima para la elaboración de aquéllas. Están exentos de este gravamen los jarabes que se expendan como especialidades medicinales o veterinarias, o que se utilicen en preparaciones de ese carácter, y las aguas minerales o gaseosas.

10. Las modificaciones precedentes —con excepción de la que se introduce al artículo 66 de la ley, que tiene una vigencia especial—, entrarán en vigor a partir del 1º de marzo de 1962.

Impuesto de sellos

Art. 6º — Modifícase la ley de sellos, texto ordenado en 1961, en la forma que se indica a continuación:

- 1º Modifícase el artículo 1º, en la siguiente forma:

- a) Reemplázase en el inciso a) la expresión «civiles o comerciales» por «civiles, comerciales o laborales».
- b) Sustitúyese el inciso b) por el siguiente:
- b) Las actuaciones judiciales;

- 2º Sustitúyese el párrafo 1º del artículo 3º, por el siguiente:

Artículo 3º — El impuesto de sellos se abonará:

- a) Habilitando con estampillas fiscales los instrumentos extendidos en papel simple;
- b) Mediante el uso autorizado de máquinas timbradoras;
- c) Mediante depósito bancario, con o sin declaración jurada, en las condiciones que determinará la reglamentación.

3º Derógase el artículo 5º.

4º Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 6º, por el siguiente:

Las demás cartas u otros documentos que sin reunir las condiciones arriba expresadas se refieren a obligaciones o actos preexistentes o a crearse, abonarán el impuesto en el momento de ser presentadas en juicio o al ser elevadas a escritura pública por las partes. En estos casos no se pagará más que un solo impuesto por todas las cartas que se refieran a la misma obligación.

5º Sustitúyese en el artículo 7º la expresión «cinco centavos moneda nacional (m\$n. 0,05)» por «un peso moneda nacional (m\$n. 1)».

6º Derógase el artículo 12.

7º Sustitúyese el artículo 13 por el siguiente:

Artículo 13. — Cuando los instrumentos sean extendidos en varios ejemplares de un mismo tenor, se pagará en uno de ellos el impuesto. En los demás ejemplares deberá dejarse constancia de lo pagado en el original. A solicitud de parte, los demás ejemplares podrán ser visados por la repartición del ramo, la cual certificará al margen de los mismos el impuesto pagado en el original.

8º Modifícase el artículo 14, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso j) por el siguiente:

j) Los contratos de mutuo y los reconocimientos de deuda cualquiera sea su origen.

b) Sustitúyese el inciso l) por el siguiente:

l) Las letras de cambio, giros y órdenes de pago. Los pagaderos a su presentación o hasta cinco días vista sólo abonarán este impuesto cuando no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento;

c) Agrégase como inciso t) el siguiente:

t) Los contratos que estipulan la constitución de derechos reales que no deban por la ley ser hechos en escritura pública.

9º Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 20, por el siguiente:

Cuando por carecerse de estos antecedentes no pudiera practicarse una esti-

mación razonable del valor económico atribuible al acto de valor indeterminado se satisfará el impuesto de ciento cincuenta pesos moneda nacional (\$ 150) por foja, considerándose como tal cada cincuenta (50) líneas de quince (15) centímetros de dimensión.

10. Intercálase en el artículo 21, a continuación del tercer párrafo, el siguiente:

La instrumentación de las prórrogas dará lugar al pago del impuesto aun cuando hayan sido previstas en un contrato anterior y ellas deban producirse por el solo silencio de las partes.

11. Sustitúyese en el artículo 22 la expresión «en los artículos 20 ó 51 incisos r) o s), según el caso», por la siguiente: «en el artículo 20».

12. Derógase en el artículo 24 la siguiente expresión final: «Debiendo abonarse por el acto de la constitución provisional el gravamen del artículo 51, inciso o).»

13. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 25 por el siguiente:

Artículo 25. — La transformación de una sociedad en otra de tipo jurídico distinto, cuando haya sido prevista en la ley, contrato o estatutos constitutivos de la sociedad, está exenta de impuesto de sellos.

14. Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 27 la expresión final «el impuesto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51, inciso n)», por la siguiente: «el impuesto fijo de ciento cincuenta pesos (\$ 150) por foja previsto en el párrafo tercero del artículo 20».

15. Sustitúyese en el artículo 30 la expresión «treinta pesos (\$ 30)» por la siguiente: «ciento cincuenta pesos (\$ 150)».

16. Sustitúyese en el artículo 31 la expresión «cuatro por ciento (4 %)» por la siguiente: «seis por ciento (6 %)».

17. Suprímese en el artículo 34, a continuación de la expresión «todo crédito o débito en cuenta», la expresión «no documentado».

18. Suprímese en el artículo 36 inciso e) la coma existente después de la palabra «bancarios» y agréganse como incisos h) e i), los siguientes:

h) Las operaciones documentadas en instrumentos sujetos al impuesto del artículo 14, incisos h) y j);

i) Las operaciones concertadas en jurisdicción provincial con los bancos del decreto ley 13.127/57 y complementarias.

19. Sustitúyese el artículo 41, por el siguiente:

Artículo 41. — Cada una de las aplicaciones o certificados de embarque de pólizas flotantes abonará el impuesto que corresponda conforme a los artículos anteriores.

20. Sustitúyese el artículos 42, por el siguiente:

Artículo 42. — Las pólizas de reaseguros referentes a riesgos que hayan abonado el impuesto no abonarán nuevo impuesto.

21. Derógase el artículos 45.

22. Sustitúyese el artículo 47, por el siguiente:

Artículo 47. — Quedan exentos del impuesto establecido en este capítulo:

- a) Los seguros contra riesgos que afecten a la agricultura o a la ganadería, mientras los productos asegurados no salgan de poder del productor;
- b) Los que cubran riesgos sobre bienes situados en el extranjero o destinados al país (seguros de importación);
- c) Los contratos u operaciones referentes a los seguros de vida individuales o colectivos y de accidentes personales;
- d) Los títulos de ahorro y capitalización;
- e) Las pólizas flotantes;
- f) Los contratos preliminares de reaseguros de carácter general celebrados entre aseguradores, en los que se estipulen las bases y condiciones para la cesión de una parte de la responsabilidad;
- g) Los certificados provisionales de seguros cuando la póliza definitiva se emita con efecto retroactivo, dentro de los noventa (90) días.

23. Sustitúyese el artículo 48, por el siguiente:

Artículo 48. — Los cheques que se libren contra cuentas radicadas en jurisdicción nacional y los librados por los bancos a la orden de un tercero y a cargo de sí mismos pagarán veinte centavos (\$ 0.20).

24. Sustitúyese el artículo 49, bajo el título «Escrituras Públicas y Actuaciones Notariales», por el siguiente:

Artículo 49. — Corresponde impuesto fijo de ciento cincuenta pesos (\$ 150) a los poderes y sus sustituciones y a los contradocumentos otorgados en escritura pública.

25. Deróganse los artículos 50 a 68.

26. Sustitúyese el artículo 69, por el siguiente:

Artículo 69. — Las actuaciones que se inicien ante el Poder Judicial de la Nación y Tribunales Arbitrales, cuando el valor del juicio exceda de mil pesos (\$ 1.000) o se trate de juicio cuyo valor sea indeterminado, abonarán en concepto de reposición de fojas un impuesto del veinticinco por ciento (25 %) de las tasas que establece el artículo 82, debiendo ser como mínimo de doscientos pesos (\$ 200) y como máximo de cinco mil pesos (\$ 5.000).

El pago será único hasta la terminación de la actuación en todas las instancias, salvo cuando por ampliación posterior, acumulación de acciones o reconvencción, se aumente el valor cuestionado, en cuyo caso se pagará o se completará el impuesto hasta el importe que corresponda.

En las actuaciones no sujetas al pago de impuesto de justicia el gravamen a satisfacer por reposición de fojas será de doscientos pesos (\$ 200).

En los juicios ejecutivos y de apremio se pagará la mitad del impuesto fijado en los párrafos primero y tercero.

27. Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

Artículo 70. — Ante los jueces nacionales de primera instancia de paz, los del trabajo cuando el valor del juicio no exceda el límite de competencia de la justicia de paz, de la Capital Federal y ante los jueces de paz del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el impuesto de actuación será de cien pesos (\$ 100).

Ante los jueces y tribunales del trabajo el impuesto se pagará con posterioridad a la sentencia definitiva y ante los demás jueces y tribunales en la misma oportunidad que en cada caso establece el artículo 86.

28. Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

Artículo 71. — El impuesto de actuación será considerado como parte de las costas del juicio y soportado en definitiva por las partes en la misma proporción en que dichas costas deben ser satisfechas.

En los expedientes judiciales o arbitrales en que una de las partes se halle

eximida del impuesto que establece esta ley, la parte contraria que resulte vencida con imposición de costas, deberá reponer el total del impuesto de actuación.

En las tercerías será de aplicación lo dispuesto en el artículo 83.

29. Deróganse los artículos 72 a 79.

30. Sustitúyese el último párrafo del artículo 80 por los siguientes:

Cuando el presunto infractor sea la parte actora o todas las partes intervinientes, el juicio quedará paralizado hasta el pago o afianzamiento de la multa e impuesto que corresponda.

Cuando el presunto infractor sea la parte demandada y la parte actora aparezca prima facie exenta de responsabilidad, el juicio seguirá su curso formándose incidente por separado con la sola intervención del representante fiscal y del presunto infractor.

Cuando corresponda paralizar las actuaciones, ambas partes o cualesquiera de ellas podrán obtener que el juicio siga su curso, depositando a la orden del juzgado, en el Banco de la Nación Argentina, a las resultas de la sentencia que se dicte sobre la presunta infracción, el importe del impuesto y multa reclamados por el representante fiscal.

31. Agrégase en el artículo 86, en el inciso a), a continuación de la cita del inciso k), la cita del inciso q).

32. Sustitúyese el artículo 87 por el siguiente:

Artículo 87. — De toda presunta infracción al impuesto de justicia se dará vista al representante del fisco a que se refiere el artículo 121.

33. Modifícase el artículo 91 en la siguiente forma:

a) Suprímese en el inciso 3º la palabra «gratuita» e intercálase la palabra «religiosas» antes de «educación e instrucción»;

b) Sustitúyese en el inciso 7º la expresión «poderes públicos» por «poder judicial»;

c) Sustitúyense los incisos 5º, 6º, 9º y 10 por los siguientes:

5º Los instrumentos y operaciones a título gratuito, o cuyo valor no exceda de veinticinco mil pesos (\$ 25.000), salvo los previstos en los incisos h), i), j), l) y s) del artículo 14, que lo será hasta quinientos pesos (\$ 500).

6º El arzobispado de Buenos Aires.

9º Las transferencias postales o telefónicas y los giros vendidos por instituciones bancarias pagaderos a su presentación o hasta cinco (5) días vista aunque no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento.

10. Los instrumentos en que se documenten la transferencia de bienes muebles e inmuebles en los casos de aporte de capital a sociedades o de disolución y liquidación de las mismas.

d) Deróganse los incisos 11 a 13, 17, 18, 23, 26, 27, 31 a 38, 40, 41, 46 a 48 y 50.

34. Derógase el artículo 96.

35. Deróganse los artículos 98, 103, 124 a 126 y 137.

36. Las disposiciones de la ley de sellos, texto ordenado en 1961, relativas al ingreso del gravamen en papel sellado se entenderán referidas a las otras formas de ingreso previstas en esta ley, conforme lo establezca la reglamentación.

37. Aclárase que los instrumentos, actos y operaciones cuyos gravámenes se deroguen por este artículo quedan exentos de impuesto de sellos.

38. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a partir del 1º de marzo de 1962. Las actuaciones judiciales en curso a esa fecha se regirán por la legislación anterior.

Zona franca de Tierra del Fuego

Art. 7º — Sustitúyese el artículo 5º del decreto ley 7.101/56, modificado por el artículo 1º del decreto ley 6.264/58, por el siguiente:

Artículo 5º — Créase una comisión encargada de asesorar a la Dirección Nacional de Aduanas en la aplicación del régimen establecido por el presente decreto ley y en particular en lo relacionado con la determinación de cupos de importación en franquicia, inscripción de importadores, establecimiento de nuevas industrias, etcétera.

La comisión será presidida por el representante del gobierno del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y estará integrada por un representante del Ministerio de Economía, otro de la Secretaría de Marina, otro de la Secretaría de Industria y Minería y otro de la Dirección Nacional de Aduanas,

La comisión formará quórum con la presencia del presidente y de por lo menos tres representantes, y el presidente tendrá doble voto en caso de empate.

Art. 8º — Auméntase, a partir del 1º de enero de 1962, en un ciento por ciento (100 %) las tasas y el derecho máximo establecidos por la ley de derechos de inspección de sociedades anónimas, texto ordenado en 1955, modificado por la ley 14.789.

Art. 9º — Modifícase la ley de aduana, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

- 1º Agrégase al artículo 2º inciso c), apartado 2º, como expresión final, la siguiente:

«...y los cargos de cualquier naturaleza para cuya revisión no exista otro procedimiento.»

- 2º Sustitúyese el artículo 16 por el siguiente:

Artículo 16. — En los casos de transgresión simultánea a las leyes de aduana y a las comunes a que se refiere el artículo 1.060 de las ordenanzas de aduana y en los casos de contrabando definido por el artículo 187 de la presente ley, la autoridad aduanera sustanciará el sumario administrativo a los fines fiscales, debiendo dentro de las 24 horas de tener conocimiento del hecho, comunicarlo a la autoridad policial competente a fin de que ésta, con la intervención judicial que corresponda, instruya el sumario de prevención correspondiente.

- 3º Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

Artículo 20. — Cuando cualquier otra autoridad independiente de la aduana aprehendiere un contrabando o tuviere conocimiento de una infracción a las leyes o reglamentos de aduana, deberá poner el hecho en conocimiento del administrador a los efectos de la sustanciación del sumario fiscal.

Si el caso fuere de aprehensión de un contrabando deberá, además, comunicarlo a la autoridad policial competente para que instruya el respectivo sumario de prevención, remitiéndole simultáneamente las personas que se hubieran detenido; los efectos aprehendidos serán enviados a la autoridad aduanera que corresponda.

- 4º Sustitúyese el artículo 21, por el siguiente:

Artículo 21. — Es facultad privativa del administrador o del funcionario que

lo reemplace tomar medidas que signifiquen disponer de las mercaderías o efectos en general afectados a sumarios y adoptar disposiciones que importen correcciones disciplinarias sobre firmas o personas registradas en la aduana para operar ante la misma. Tales facultades no podrán ser delegadas en oficina o funcionario alguno.

- 5º Agréganse al artículo 198, los siguientes párrafos finales:

Lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo no será aplicable a las mercaderías de origen extranjero sujetas al pago de impuesto interno que se hallen en plaza, en lugares destinados a su comercialización, sin el estampillado fiscal respectivo. En estos supuestos, se presume de derecho que tales mercaderías no han tributado los gravámenes a la importación y no se instruirá sumario, disponiéndose de inmediato su comiso y la aplicación de las penas indicadas en este artículo, sin perjuicio de la que pudiera imponerse posteriormente por contrabando. Facúltase al Poder Ejecutivo para aumentar en estos casos hasta el ciento por ciento (100 %) el importe de la participación que corresponda a los denunciantes y aprehensores y a integrar un fondo especial con el producido de la recaudación aduanera, destinado a pagar, dentro de los quince días siguientes al secuestro de la mercadería, el importe de la adjudicación. Facúltase igualmente al Poder Ejecutivo para determinar el importe sobre el cual se liquidará la participación a denunciantes y aprehensores y para disponer la comercialización de las mercaderías secuestradas por intermedio de los industriales del ramo y/o de sus cámaras representativas.

Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes

Art. 10. — Prorrógase por el término de diez (10) años el impuesto establecido en el título I de la ley de impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960) con las modificaciones que se establecen seguidamente:

- 1º Sustitúyese el artículo 1º, por el siguiente:

Artículo 1º — Establécese con carácter transitorio un gravamen sustitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes que se aplicará en todo el territorio de la Nación a los capitales resultantes de los balances anuales que cierran hasta el 30 de diciembre de 1971, con arreglo a las disposiciones del pre-

sente título. La reglamentación fijará el procedimiento a seguir para los casos en que no se efectúen balances anuales.

2º Sustitúyese el artículo 2º, por el siguiente:

Artículo 2º — Están sujetas al impuesto de este título:

- a) Las sociedades de capital que revistan tal carácter a los efectos del pago del impuesto a los réditos, con exclusión de las asociaciones civiles aludidas en el inciso c) del artículo 54 de la ley 11.682, texto ordenado en 1960;
- b) Las empresas unipersonales y las sociedades de personas que revistan tal carácter a los efectos del impuesto a los réditos, matriculadas como comerciantes en las condiciones establecidas por el Código de Comercio.

Las sociedades de economía mixta tributarán el impuesto en proporción al capital perteneciente a los accionistas privados.

Las sociedades anónimas en formación están sujetas al gravamen desde la fecha y en las condiciones que establezca la reglamentación.

3º Sustitúyese en el segundo apartado del artículo tercero la locución «excluido las inversiones en acciones de otras empresas y en bienes situados con carácter permanente en el exterior» por «excluido las inversiones en acciones o en participaciones en otras empresas sujetas al gravamen de esta ley y en bienes situados con carácter permanente en el exterior».

4º Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

Artículo 4º — Del capital que se determine conforme a las normas anteriores, se deducirán los siguientes conceptos:

- a) Honorarios del directorio y síndico en las sociedades de capital;
- b) Habilitaciones y gratificaciones, que se paguen o pongan a disposición dentro de los cinco (5) meses o tres (3) meses de cerrado el ejercicio, según se trate de sociedades de capital o de los demás responsables de esta ley;

Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, la Dirección General Impositiva admitirá dicha deducción aun cuando la distribución se efectúe con posterioridad al vencimiento del plazo indicado;

c) El impuesto a los réditos del ejercicio, las sociedades anónimas y de economía mixta. Las firmas unipersonales y sociedades en comandita por acciones o de personas, un porcentaje a fijar por el Poder Ejecutivo, aplicado sobre las utilidades ajustadas de acuerdo con las normas de la ley 11.682;

d) El impuesto a los beneficios extraordinarios del ejercicio.

5º Derógase el artículo 5º.

6º Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

Artículo 6º — El pago del gravamen tiene carácter de definitivo, aunque a su vencimiento no se prorrogue la vigencia de esta ley.

7º Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

Artículo 9º — Las provincias que adhieran al régimen de este título se obligan a:

1º Derogar los gravámenes locales, cualquiera sea su característica y denominación, que inciden directamente sobre la materia imponible a que se refiere este título, con prohibición de implantarlos en lo sucesivo;

2º Modificar el régimen de los impuestos locales a la transmisión gratuita de bienes a efectos de excluir la materia imponible a que se refiere este título en la determinación del haber sucesorio.

8º El gravamen que se crea por este artículo, en cuanto alcanza a las empresas unipersonales y sociedades de personas, se aplicará exclusivamente en la Capital Federal y en las provincias que adhieran a esta reforma.

En caso de adhesión parcial, deberán excluirse en la determinación del capital, los bienes radicados económicamente en las provincias no adheridas, en la forma que determinará la reglamentación.

9º Las modificaciones del presente artículo serán de aplicación para los ejercicios que cierren a partir del 31 de diciembre de 1961 inclusive, salvo que se trate de empresas unipersonales y sociedades de personas que a la fecha de publicación de la presente ley hubieren cerrado sus ejercicios anuales, en cuyo caso la incorporación al régimen de este impuesto se producirá con referencia a los ejercicios que se cierren a partir del 31 de diciembre de 1962, inclusive.

Art. 11.—Modifícase el título II de la ley del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960) en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el artículo 12, por el siguiente:

Artículo 12. — Las personas físicas, por la parte de sus patrimonios no sujeta al régimen del título I, podrán optar por abonar un impuesto anual, en sustitución del impuesto local a la transmisión gratuita de bienes por causa de muerte establecido por la ley 11.287, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes de este título.

Impuesto a la transmisión gratuita de bienes

Art. 12. — Modifícase la ley 11.287 (texto ordenado en 1961), en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9º por el siguiente:

En el caso de inmuebles el impuesto se liquidará sobre la valuación que se determine en la forma que disponga la Dirección General Impositiva.

2º Sustitúyese el artículo 14, por el siguiente:

Artículo 14. — Para determinar el monto imponible sujeto a este impuesto no se computará:

- a) El valor de las inversiones en acciones emitidas por entidades alcanzadas por la ley de impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960);
- b) A partir del 31 de diciembre de 1961, el valor de las inversiones en acciones nominativas y los importes que pertenezcan al dueño o socios en empresas unipersonales y sociedades de persona alcanzadas por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes;
- c) Los montos cubiertos por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes para las personas físicas.

A los efectos precedentes se considerará como fecha de la transmisión la del fallecimiento del causante o la de celebración del acto que la exteriorice, si se tratare de transmisión entre vivos.

Tampoco se computarán las inversiones en los casos de que el fallecimiento del accionista o socio hubiere ocurrido antes del 31 de diciembre de 1961, pero en el transcurso de un ejercicio alcanzado por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes.

3º Derógase el artículo 25.

Art. 13. — A partir del 1º de enero de 1962 la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto municipal a las actividades lucrativas estará a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

A tal efecto, facúltase a la Dirección General Impositiva —actualmente a cargo de dicho gravamen— para convenir con el ente municipal la forma y condiciones en que se procederá a concretar la correspondiente transferencia.

Las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones y las del reglamento de dicha ley que se refieren al impuesto a las actividades lucrativas, continuarán siendo de aplicación mientras la Municipalidad de Buenos Aires no dicte nuevas normas al respecto. Esta disposición será igualmente de aplicación a las actuaciones en trámite al 1º de enero de 1962 que, en virtud del convenio a que se refiere este artículo, puedan transitoria o definitivamente seguir a cargo de la Dirección General Impositiva.

El intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires tendrá las mismas facultades que la ley 11.683 (t. o. en 1960) otorga a la Dirección General Impositiva, para entender en las cuestiones vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto municipal a las actividades lucrativas, que se susciten con los contribuyentes y demás responsables por los años en que dicho gravamen se rigió por los preceptos de esa ley.

Art. 14. — Modifícase el segundo párrafo del artículo 5º de la ley 12.704, en la siguiente forma:

Los recargos que establece el Concejo Deliberante por atraso en el pago de los gravámenes municipales, no podrán exceder del ciento por ciento de los mismos.

Art. 15. — Modifícase la ley 13.487 en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el último párrafo del artículo 5º por el siguiente:

Los infractores de las reglamentaciones que la Municipalidad dicte en virtud de las facultades acordadas por este artículo serán pasibles de multas de \$ 100 a \$ 10.000, sin perjuicio de los recargos que pudieran corresponder por aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5º de la ley 12.704.

2º Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:

Artículo 6º — Los contribuyentes y demás responsables que hayan evadido total o parcialmente las obligaciones impositivas, serán pasibles de multas de hasta cinco veces el impuesto o contribución evadidos.

Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas de una hasta diez veces el impuesto defraudado o que se haya pretendido defraudar, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes los contribuyentes, responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos.

Con igual pena serán reprimidos los agentes de retención que mantengan en su poder impuestos retenidos después de haber vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar.

Las multas fijadas por el artículo anterior y por el presente, serán graduadas por la municipalidad de acuerdo con las circunstancias y gravedad de los hechos.

Art. 16. — CANCELÁNSE las deudas por contribución territorial y contribución inmobiliaria, sus recargos, intereses y multas correspondientes a ejercicios anteriores a 1952.

CONDÓNANSE los recargos, intereses y multas por mora en el pago de la contribución inmobiliaria de los años 1952 a 1960, ambos años inclusive, a condición de que los responsables ingresen el gravamen adeudado antes del 1º de abril de 1962. Los cobradores fiscales percibirán como única retribución el diez por ciento del impuesto que tuvieren en gestión de cobro y que se ingrese con motivo de esta disposición. Quedan exentos de impuesto de contribución territorial, a partir del 1º de enero de 1961, los inmuebles ubicados en zonas de jurisdicción nacional.

Art. 17. — CONDÓNANSE las sumas adeudadas por el ex Frigorífico Nacional Doctor Lisandro de la Torre en concepto de impuesto a las ventas, sus accesorios, intereses y multas correspondiente a los períodos en que desarrolló sus actividades bajo dependencia oficial, ya sea del Estado nacional o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 18. — MODIFÍCASE la ley de impuesto para aprendizaje (texto ordenado en 1959), en la siguiente forma:

1º Sustitúyese en el artículo 1º la denominación de «impuesto para aprendizaje» por la de «impuesto para educación técnica», y la mención «Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional» por la de «Consejo Nacional de Educación Técnica».

2º Modifícase el artículo 2º, en la siguiente forma:

- a) Reemplázase la expresión «de aprendizaje»: por «de educación técnica»;
- b) Sustitúyese el texto final de este artículo, a continuación de «asociaciones o cámaras gremiales», por el

siguiente: «siempre que tales cursos o escuelas estén aprobados por el Consejo Nacional de Educación Técnica».

3º Derógase el artículo 3º.

4º Agrégase al artículo 4º, el siguiente párrafo:

A los efectos de esta ley se calificarán también como establecimientos industriales aquellos en los que se efectúen trabajos de construcción, transformación, adaptación o reparación de cualquier clase de materiales o elementos elaborados o semielaborados.

5º Agrégase el siguiente artículo:

Artículo ... — La Dirección General Impositiva transferirá a la cuenta «Fondo para Educación Técnica, orden Consejo Nacional de Educación Técnica» el producido del impuesto establecido por la presente ley.

Art. 19. — ELÉVASE al uno por ciento (1 %) el adicional establecido por el artículo 19 de la ley 15.273.

Art. 20. — FACÚLTASE al Poder Ejecutivo para instituir un impuesto de hasta un cinco por ciento (5 %) sobre el precio básico a las rifas o sorteos de carácter privado que se autoricen en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 21. — INCLÚYASE al territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el régimen de coparticipación establecido por la ley 14.788, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. La participación del territorio equivalente al 0,04 % del total recaudado, será tomada de los fondos que corresponden a la Nación.

Art. 22. — AUMÉNTASE a cincuenta mil pesos moneda nacional (\$ 50.000) la multa máxima prevista en el artículo 14 de la ley 14.046. Las multas a que se refiere dicho artículo serán aplicadas por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos. En las actuaciones respectivas no será necesario el asesoramiento legal a que alude el artículo 23 de dicha ley.

Art. 23. — ESTARÁ exenta del impuesto de sellos la constitución de sociedades de cualquier tipo, incluso anónimas, que sean formadas por empleados y obreros del Estado a fin de asumir la administración y explotación de servicios que sean privatizados. La exención comprenderá también todo otro impuesto que grave la constitución de tales sociedades.

Art. 24. — FACÚLTASE al Poder Ejecutivo para ordenar las leyes de impuestos con las modificaciones dispuestas por esta ley.

Art. 25. — COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.

FEDERICO F. MONJARDÍN.
Guillermo González.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración.

Sr. Bértora. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Bértora. — Hago indicación de que la Cámara, por intermedio de la Presidencia, invite al señor secretario de Estado de Hacienda a pasar al recinto.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración la moción formulada por el señor senador por Entre Ríos. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guido). — Se procederá en consecuencia.

Sr. Bértora. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Bértora. — El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que entra a considerar la Cámara se refiere al proyecto de ley, en revisión, originado en la iniciativa del Poder Ejecutivo por la que se introducen modificaciones al régimen impositivo vigente. El proyecto constituye un intento de adecuar la legislación impositiva a las circunstancias y necesidades del país en una etapa de desarrollo como la que ahora vivimos. No repercutirán de manera alguna las reformas propiciadas en un aumento de presión tributaria, sino que, por el contrario, al llegarse a una simplificación de los sistemas de aplicación de los distintos gravámenes, se evitarán formas de evasión y así se distribuirá más racionalmente la carga fiscal.

Creemos que esta reforma será el paso previo a otra de más envergadura, que encarará una reestructuración total del sistema impositivo, contemplando desgravaciones que, por el momento, no pueden establecerse, pues la evasión y la irregular percepción de algunos impuestos, son una rémora que hacen imposible tales medidas. La acción enérgica de las autoridades responsables de la recaudación, aplaudida por todo el pueblo argentino, hace lógico esperar un mejoramiento sustancial, a muy breve y corto plazo.

Comienza el proyecto en revisión —del que un cuadro comparativo entre éste, la legislación vigente y el proyecto del Poder Ejecutivo tienen todos los señores senadores sobre las bancas— introduciendo innovaciones de singular importancia a la ley 11.683, de procedimiento para la aplicación y percepción de los impuestos.

—Ocupa la Presidencia el señor senador Pérez Aznar, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales.

Sr. Bértora. — Por el artículo 1º —y voy a ir refiriéndome a todos los apartados de cada artículo— se establece **expresamente** que son fa-

cultades del director general disponer por sí la inscripción de agentes de retención y reglamentar la forma en que los contribuyentes han de documentar sus deudas fiscales, especialmente en el caso de prórrogas. Con relación al domicilio fiscal, sólo se aceptarán cambios del mismo, ya sea real, legal o especial, en las condiciones que establezca la dirección general. De este modo se tiende a evitar que, realizados en forma subrepticia, originen inconvenientes en las notificaciones.

Se unificará el procedimiento para la determinación de oficio. Hasta ahora había dos especies: el de la determinación cierta, cuando el fisco conocía elementos ciertos de fijación del hecho imponible, y el de la «determinación presuntiva», cuando el hecho imponible debía deducirse de otras circunstancias.

Esta unificación permitirá a los contribuyentes, en ambos casos, la posibilidad de concretar su real obligación fiscal. Por otra parte, se dará vista de los cargos efectuados también para el caso de determinación presunta, pues es más razonable aún para este caso, que exclusivamente para la renta cierta, según estaba dispuesto.

Aparece también como innovación la institución de la «determinación parcial», de manera que podrán reabrirse las actuaciones con posterioridad a cualquier estimación practicada por el fisco, con el único requisito de que en la misma se haga constar que se refirió sólo a determinado aspecto de las actividades del contribuyente. Es decir que la Dirección General Impositiva conservará intactas sus facultades en aquellos aspectos que no han sido materia de su intervención, y permitirá de tal modo realizar verificaciones parciales en serie a los contribuyentes de un mismo ramo, en un aspecto determinado, y así reprimir ciertas formas de evasión.

En lo que respecta a los anticipos de impuestos, se agregan otros índices que permitirán al contribuyente distribuir la carga fiscal a lo largo del año en forma más racional. Hasta ahora dichos anticipos se calculaban sobre la base de los impuestos pagados en año anterior. Además de ese criterio, en adelante también podrán calcularse basándose en la proporción de ventas, capitales, rentas, suministros o inversiones.

Como los impuestos generalmente se pagan en cuotas que se prolongan más allá de un ejercicio, se proyecta agregar un párrafo al artículo 33 para obligar a los contribuyentes a imputar a la deuda más antigua los pagos que se hagan en cumplimiento de prórrogas. En síntesis, no es sino el sistema del Código Civil en materia de obligaciones.

Se sustituye la actual escala progresiva de recargo acumulativo del 3 % mensual, calculado sobre el monto del gravamen adeudado y desde la fecha en que éste debía abonarse. Se elimina así el problema de la acumulación de recargos que llegan hasta el 250 % y que han creado

situaciones de difícil solución para los contribuyentes que deban pagar impuestos acumulados por cinco años, más un recargo de dos y media veces el monto adeudado.

El nuevo recargo acumulativo llegará, como máximo, al 180 %. Así mismo se faculta al director general a redimir, en todo o en parte, la obligación de abonar los recargos en casos excepcionales debidamente justificados, y podrá autorizar a los jueces administrativos, en los casos de ajustes realizados por la dirección, a adoptar igual medida si hubiere existido error excusable de hecho o de derecho, respecto de la omisión del impuesto.

Consecuente con esta medida se deroga el artículo 44, y de ese modo se exime de multa a las infracciones no dolosas; además la modificación del artículo 45 establece que el mínimo de las multas por defraudación fiscal será una vez el impuesto, en lugar de tres como autoriza la legislación vigente.

Se faculta a la Dirección General Impositiva a publicar periódicamente, por los medios de divulgación que estime adecuados, el nombre, domicilio y actividad de los infractores que hubieran incurrido en defraudación fiscal, y el importe de la sanción impuesta.

Entre las circunstancias en que la ley establece que se presumirá la intención de defraudar al fisco se proyecta agregar la situación de contribuyentes que —por la naturaleza o volumen de las operaciones realizadas, la cuantía de los beneficios obtenidos o su formación intelectual— no pueden ignorar su calidad de contribuyentes o responsables y la existencia de las obligaciones emergentes de tal condición.

Entendemos que el proyecto corrige una situación injusta y presume la existencia de fraude fiscal cuando concurren estas circunstancias, presunción que es extendida así mismo a los agentes de retención que omitan, total o parcialmente, actuar como tales, cuando esa omisión provocare un evidente perjuicio al fisco.

Actualmente el interés punitivo —en el caso de que sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los importes adeudados— es del 1 ½ % mensual, y el proyecto lo duplica elevándolo al 3 % mensual, computable desde la fecha de la interposición de la demanda. Quiero aclarar, señor presidente, que este interés punitivo se aplica cuando el deudor está en mora y se han agotado todas las instancias administrativas y los medios persuasivos, debiendo recurrir la Dirección General Impositiva a la justicia. Si bien es cierto que es un interés sobre otro interés se justifica por la distinta naturaleza del hecho que lo motiva.

Se ha considerado justo incluir los recargos del artículo 42 entre las situaciones de exención de multas que establece el artículo 51, que considera a las sucesiones indivisas, al cónyuge cuyos réditos propios percibe o de que disponga en su totalidad el otro, los incapaces y los

penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal, los concursados civilmente y los quebrados, y el caso del fallecimiento del infractor. En el mismo artículo 51 se incluye actualmente a las sociedades en liquidación, pero la reforma proyectada las excluye. Esta exclusión se justifica plenamente pues no existe razón para exceptuar de recargos o multas a sociedades en liquidación por terminación del negocio, por muerte de uno de los socios que figura en la razón social o por haber perdido la personería jurídica —en el caso de las sociedades anónimas— pero sin que haya disminuido su patrimonio.

La ley 15.265 privó al fisco del derecho de apelar de las sentencias recaídas en los juicios de apremio. Si tenemos en cuenta que dichas sentencias hacen cosa juzgada en los aspectos expresamente contemplados en ellas, advertimos fácilmente que en el caso de un error judicial en primera instancia el Estado queda muchas veces sin posibilidad de hacer valer su derecho.

Consecuentemente, al artículo 91 se le agrega un párrafo que establece que la sentencia será apelable cuando el monto por el que prosperen las excepciones sea superior a 4.000 pesos.

Para superar algunos reparos de orden legal que se han opuesto al sistema actual de notificación por carta certificada con aviso de retorno, se disponen normas más precisas con respecto al procedimiento a seguir para las notificaciones, citaciones o intimaciones de pago.

El actual artículo 100 establece el secreto de las declaraciones juradas, manifestaciones e informes del contribuyente, así como los juicios de demanda contenciosa, en cuanto consignen aquellas informaciones. Por el proyecto que tratamos se exceptuarían las publicaciones de nóminas de infractores y las citaciones por edictos, las que se agregan a las consultas de organismos recaudadores provinciales y municipales, siempre que las informaciones que éstos soliciten estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes en sus respectivas jurisdicciones.

Se modifica el artículo 122, que trata de la integración del tribunal fiscal, y se establece que el presidente designará por sorteo los miembros que sean necesarios, de acuerdo con el reglamento del procedimiento.

En varios casos se han ampliado los términos para interponer las acciones y/o recursos para evitar la perención de las instancias, pues la práctica ha puesto en evidencia que los actuales eran demasiado cortos.

Por el artículo 165 se establece que la Dirección General Impositiva tendrá derecho a apelar de la sentencia del Tribunal Fiscal si al escrito acompaña una autorización del subsecretario de Hacienda, pudiendo ser reemplazado, en ausencia o impedimento de éste, por el director general de Impuestos y Contribuciones, a quien deberá presentar la Dirección

General Impositiva un informe fundado sobre las razones que aconsejen la apelación del fallo dictado por el Tribunal Fiscal.

Con el fin de evitar un papeleo inoperante, se establece que una vez concedida una autorización, ésta será válida para todos aquellos casos estrictamente análogos.

Al haberse rebajado la escala de recargos del artículo 42, pierde significación la penalidad impuesta por el artículo 136 para el caso de recursos maliciosos, y nos parece lógico, en este caso especial, doblar tal penalidad.

Se introduce una práctica que es común en otros países y que permitirá a la Dirección General Impositiva una extraordinaria simplificación en su trabajo administrativo. Mediante el procedimiento de devolver los bancos a sus clientes los cheques librados a la orden de la Dirección General Impositiva, una vez cancelados y satisfechos los requisitos internos de acuerdo con las prácticas bancarias, se evitará que la dirección deba acusar recibo de los pagos que le hagan en cheques.

Finalmente, y a continuación del artículo 171 de la ley 11.683, se dispone acordar a la Dirección General Impositiva un régimen de autarquía administrativa, facultándose así mismo al Poder Ejecutivo a reglamentar dicha disposición con cargo de su posterior informe al Honorable Congreso.

Dentro de las facultades a acordarse al organismo, figura la autorización para extraer fondos de las cuentas recaudadoras, según lo requieran sus necesidades, sin excederse de los créditos aprobados en su presupuesto, como también la creación de un consejo cuya función es la de asistir a su titular, con la expresa facultad de redistribuir los créditos fijados en el presupuesto de cada ejercicio.

Paso, señor presidente, a ocuparme ahora del artículo 2º, referente a la ley 11.682 de impuesto a los réditos.

Entre las situaciones no gravadas por el impuesto a los réditos figuran las utilidades de los criaderos fiscalizados, en la venta de «semillas originales» de oleaginosos, forrajeras y arroz.

Por la reforma proyectada se establece que será incluida en este artículo la venta de cualquier clase de semilla de categoría «original».

Como se ha ido haciendo en años atrás, y siguiendo la política de desgravación a la renta del trabajo personal, se aumenta la deducción adicional en 30.000 pesos, llevándola de 96.000 pesos a 126.000 anuales; además, y con alcance para todas las personas de existencia visible residentes en el país, se incrementa el mínimo no imponible en 12.000 pesos, elevándolo de 24.000 a 36.000 pesos anuales.

Tomando como ejemplo una familia tipo, constituida por matrimonio con dos hijos a su cargo, las deducciones que por cargas de familia se efectúan sobre sus réditos imposables alcanzan por este proyecto a 36.000 pesos anuales, o sea

11.000 más que la autorizada por la legislación vigente.

Con estas modificaciones, el total de las deducciones por mínimo no imponible, cargas de familia y gastos de enfermedad llega a 204.000 pesos anuales para el citado grupo familiar, es decir que este impuesto no gravará los ingresos netos de un jefe de familia con un haber mensual de hasta 17.000 pesos.

Para los casos de contribuyentes que tuvieran a su cargo más de tres hijos, aquéllos podrán deducir, a partir del año 1962, 4.200 pesos anuales por cada hijo que exceda de ese número. Esta deducción alcanzaba actualmente a 2.400 pesos.

El inciso 1) del artículo 62 fija el 38,36 % como alícuota a aplicarse y retenerse a las remuneraciones que se abonen por asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, prestado desde el exterior.

Se proyecta un agregado a este inciso que permitirá considerar el cincuenta por ciento de las sumas abonadas por tal concepto como costo del beneficiario del exterior, pero únicamente en los casos de asesoramiento exclusivamente técnico-industrial prestado a las explotaciones mineras, empresas de transporte, astilleros navales e industrias manufactureras o de transformación.

Es sabido que los ganaderos deben realizar un aporte de hasta el 2,5 % del importe de las ventas para consumo o exportación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 6º del decreto 8.509/56.

La legislación impositiva vigente sólo permite deducir en el balance fiscal el 30 % de las sumas abonadas en tal concepto. El proyecto en consideración satisface plenamente las demandas que han venido interponiendo los organismos confederados de los productores, al permitir deducir como gasto el total de las sumas aportadas por los productores ganaderos.

El artículo 76 de la ley de réditos dispone que de los «sueldos, jornales, honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas sólo podrá deducirse como gasto necesario para obtener, mantener y conservar dichas rentas el importe correspondiente al descuento que en concepto de aporte jubilatorio deben efectuar —de conformidad con las disposiciones legales en vigor— los titulares de tales rentas».

El adverbio «sólo» hacía imposible la coordinación lógica con otras disposiciones de la ley e, incluso, con lo dispuesto por la resolución general Nº 693, que permite deducir ciertas sumas en concepto de viáticos, gastos de movilidad y representación.

Por lo tanto, y con buen criterio, se proyecta eliminar esa palabra, dando al texto el carácter aclaratorio que debe tener, considerando que podría sostenerse que los aportes jubilatorios son inversiones de capital destinadas a obtener una renta de tipo vitalicio y, por lo tanto, no deducibles en su totalidad.

En el mismo artículo se proyecta incluir en la disposición que establece la opción del pago de impuesto para los jueces también a los vocales del Tribunal de Cuentas de la Nación.

Concluyen las modificaciones a la ley de impuesto a los réditos agregando un nuevo inciso al apartado 1º del artículo 81, que trata de las deducciones permitidas a las empresas o explotaciones existentes o nuevas que realicen inversiones vinculadas con sus actividades. Dicho agregado autoriza a deducir la mitad de las sumas invertidas en plantaciones de viñedos y montes frutales.

Con respecto al impuesto a los beneficios extraordinarios, la ley actual establece que el gravamen recae sobre las empresas o explotaciones. Resulta así que si una empresa tiene varias explotaciones, debe hacer la correspondiente discriminación y establecer el capital aplicado y los resultados de cada una de ellas.

Ello ha dado lugar a situaciones que originan interpretaciones encontradas, por tratarse de apreciaciones subjetivas, como es, por ejemplo, la proporción que dentro del activo y de los gastos corresponde aplicar a cada explotación.

Es por ello que la reforma proyectada considera como sujeto del impuesto a la empresa, con prescindencia de las explotaciones que realice, eliminándose de tal forma los problemas mencionados.

En cuanto a la modificación que declara exentos del pago de este impuesto a los réditos extraordinarios de los comisionistas, corredores, rematadores, viajantes de comercio, despachantes de aduana y demás auxiliares del comercio, se justifica plenamente en razón de que en estas actividades tiene una preponderancia evidente el factor personal en la obtención de los beneficios. Se evita también, con esta forma, el problema de determinar el capital realmente aplicado a la actividad. Además, la recaudación proveniente de este tipo de contribuyentes es de muy escasa significación.

Las normas vigentes relativas a la determinación del concepto «capital y reservas libres», y demás circunstancias que hacen a la determinación del capital computable, establecen que el impuesto se aplicará sobre la base del capital dinámico afectado a la explotación.

En adelante, según el proyecto, se tomará como base el capital estático a una fecha dada, lo que coincide con el sistema del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes y que, por lógica consecuencia, redundará en una mayor simplicidad en la aplicación de ambos gravámenes.

Complementando la modificación comentada, se deroga el artículo 8º de esta ley. Las modificaciones establecidas regirán para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre último, inclusive, excepto cuando se trata de responsables que a la fecha de publicación de la presente ley hubieran cerrado sus balances, pudiendo

—en este caso— optar por liquidar el gravamen de acuerdo con las normas vigentes.

A partir del 1º de enero de 1962 las ventas de productos importados tendrán el mismo tratamiento fiscal que las ventas de productos similares nacionales, reza la reforma que se proyecta.

Conforme a los compromisos adquiridos por nuestro país con motivo del ingreso al GATT y a la adhesión al Tratado de Montevideo, es preciso eliminar todo tratamiento discriminatorio basado en el origen de los productos.

Entre las deducciones que permite el artículo 8º de la ley, a los efectos de determinar el impuesto, se incluyen por el proyecto en estudio los gastos directos de venta que inciden sobre las enajenaciones que los industriales efectúan al menudeo y al público consumidor. Esta modificación no hace sino poner en plano de igualdad situaciones idénticas.

Coincidentes con el propósito del gobierno de fomentar el agro, se declaran exentas de este impuesto las ventas de los jugos puros naturales y concentrados de frutas y la maquinaria agrícola.

Las mismas razones expuestas que inspiran la supresión de todo tratamiento discriminatorio en el impuesto a las ventas son las que se tienen en cuenta para propiciar la sustitución del artículo 31 de la ley de impuestos internos, y la derogación de sus correlativos (artículos 32, 33 y 34). En lugar de las actuales tasas —variables según mezclas, calidades, origen y tipos de cigarros o tabacos—, el Poder Ejecutivo graduará la escala del gravamen, de acuerdo con la facultad que se le confiere, en función de las distintas calidades y/o pesos de los productos. En ningún caso el impuesto podrá exceder del 30 % del precio de venta del fabricante o importador.

Se faculta así mismo al Poder Ejecutivo a introducir modificaciones en el sentido de incorporar al régimen del título I de la ley algunos de los gravámenes que figuren actualmente en el título II y viceversa, transformando, en su caso, las tasas fijas en tasas ad valorem, pero siempre que no excedan del 20 % del precio de venta.

Esta autorización se hace con vistas a una mayor racionalización del sistema de aplicación y percepción de algunas tasas que, incluidas hoy en uno de los títulos de la ley, se adaptan mejor al régimen de imposición previsto por el otro título.

Actualmente estaban gravados con el 10 % los hilados de seda artificial o fibras sintéticas similares, ya sean de producción nacional o importados, y el proyecto en estudio los exime para el futuro de tal gravamen, modificándose la aplicación de este impuesto en lo que respecta a los tejidos y artículos importados que contengan hilados de seda, los que pagarán la tasa correspondiente en la forma que establezca el Poder Ejecutivo.

De esta manera se coloca en pie de igualdad el hilado de seda contenido en tejidos o artículos confeccionados de producción nacional o importados.

El artículo 66 de la ley de impuestos internos establece que las compañías de seguros pagarán el 8½ % sobre las primas de seguros que celebren, excepto las de seguros de vida, que pagan el 2½ %, y las de seguros agrícolas, que no pagarán porcentaje alguno.

La modificación proyectada es la siguiente: como regla general, se establece en el 10 % el impuesto que deberán pagar las compañías de seguros sobre las primas, salvo las exenciones dispuestas por leyes especiales.

No obstante, pagarán las siguientes tasas: a) los seguros sobre riesgos personales, accidentes del trabajo y responsabilidad civil por daños a personas, que pagarán el 4 %; b) los seguros de exportación pagarán el 9 %; c) los seguros de importación pagarán el 8½ %; d) en la categoría de exentos están los seguros de vida, de accidentes personales, individuales y colectivos, y aquellos que cubran riesgos que afecten a la agricultura y la ganadería.

Estas modificaciones están inspiradas en un alto sentido social y de promoción, como es fácil ver al analizar el artículo comentado.

La modificación al artículo 66 entrará en vigencia dentro del régimen de la ley 14.390 de distribución de impuestos internos unificados a partir del momento en que todas las provincias adhieran a dicha modificación, derogando los impuestos locales de sellos sobre todas las operaciones de seguros y reaseguros y obligándose a no establecerlos en lo sucesivo.

En la misma oportunidad quedará derogado el impuesto de sellos nacional sobre dichas operaciones con el mismo alcance.

Se agrega un artículo nuevo referente a las bebidas gasificadas —que no estén elaboradas con un 10 % como mínimo de jugos o zumos de frutas o sus extractos naturales—, los refrescos y jarabes, extractos o concentrados —no derivados de la fruta— aptos para la preparación de bebidas sin alcohol. Serán gravadas las primeras con un 10 % y las segundas con un 15 %.

En la parte final se establece que los jarabes que se expenden como especialidades medicinales o veterinarias, o que se utilicen en tales preparaciones, y las aguas minerales o gaseosas no se consideran dentro del artículo y están exentos del gravamen.

El artículo 30 de esta ley establece el impuesto a los cigarrillos nacionales e importados.

La reforma proyectada dispone que en los casos de reincidencia en infracciones a dicho artículo y se trate de mercaderías de procedencia extranjera, la Dirección General Impositiva podrá disponer la clausura del local por el término de hasta cinco días, además de la multa correspondiente. Esta medida y otras en concordancia que contiene este proyecto de reformas impositivas, serán sin duda un impacto al contrabando

que sabemos los males que produce a la economía nacional.

Las modificaciones precedentes —con excepción de la introducida en el artículo 66 de la ley de impuestos internos, que como ya expliqué tiene una vigencia especial— entrarán en vigor a partir del 1º de marzo de 1962.

Me ocuparé ahora de la ley de sellos a que se refiere este proyecto en el artículo 69.

Las modificaciones propuestas a la ley de sellos, en su conjunto, tienden a eliminar, por una parte, disposiciones anacrónicas caídas en desuso, suprimir el uso del papel sellado, como forma de pago del impuesto, y derogar o adecuar impuestos improductivos que traban notoriamente las actividades, entorpeciendo los trámites administrativos y judiciales.

La derogación de los impuestos a los giros internos, a los recibos de dinero, a las actuaciones administrativas y a numerosos actos e instrumentos gravados actualmente con tasas fijas, así como el reemplazo del sellado de actuación judicial por un aumento del impuesto de justicia en un 25 por ciento, significará un alivio para el comercio, la industria y los profesionales, no tanto por el monto de estos gravámenes sino por las molestias que actualmente ocasiona su ingreso.

Por otra parte, en lo relativo a sociedades, se establece que la prórroga automática de las mismas, cuando los socios expresan por escrito que continuará en vigencia la sociedad, dará lugar al pago del impuesto.

Pero en el caso de transformación de una sociedad en otra de tipo distinto, cuando haya sido prevista en la ley, contrato o estatuto constitutivo, estará exenta de impuesto de sellos.

Una desgravación que será bien recibida porque elimina problemas de jurisdicción y de superposición impositiva es la que exime del impuesto de sellos a las operaciones concertadas con los bancos en jurisdicción provincial.

Las modificaciones a la ley de sellos, que he comentado en forma somera, se aplicarán a partir del 1º de marzo del corriente año, pero las actuaciones judiciales en curso a esa fecha se regirán por la legislación anterior.

El decreto ley 7.101/56, modificado por el 6.264/58, declaró la zona franca de Tierra del Fuego y, por su artículo 5º, crea la comisión permanente encargada de establecer y determinar el contralor del sistema estatuido por dicho decreto ley.

El proyecto en consideración crea una Comisión Asesora de la Dirección Nacional de Aduanas, en reemplazo de la hasta ahora comisión permanente, y serán sus funciones específicas el estudio de la aplicación del régimen impuesto por el decreto ley 7.101/56 ya mencionado, en particular en lo relativo a cupos de importación en franquicia, inscripción de importadores, establecimiento de nuevas industrias, etcétera.

Las tasas de inspección de sociedades anónimas en vigencia se proyecta aumentarlas en un 100 %. Es una simple actualización de las mismas.

En cuanto a la ley de aduanas, se agrega en el ámbito de su competencia —además de la imposición de multas y recargos que se aplican automáticamente por el simple transcurso del tiempo— los cargos de cualquier naturaleza para cuya revisión no exista otro procedimiento.

El problema del contrabando es bien conocido por todos y es lógico recibir con interés un proyecto de reformas que solucione, aunque sea en parte, la situación actual.

Una de las circunstancias con que frecuentemente tropieza la actividad fiscal es la inercia o apatía de los que, de una u otra forma, llegan al conocimiento del delito. Esta inercia tiene su explicación en el hecho de que la participación que la ley reconoce a los denunciantes y aprehensores es, en general, ilusoria por la demora de largos años que, generalmente, insume la tramitación de los sumarios.

El proyecto, por lo tanto, presume de derecho que no han pagado los gravámenes de importación las mercaderías de procedencia extranjera sujetas a impuesto interno que estén a la venta en plaza sin el estampillado fiscal respectivo. En estos casos se faculta al Poder Ejecutivo a elevar hasta el 100 % el importe de la participación que corresponda a denunciantes y aprehensores y a integrar un fondo especial con el producido de la recaudación aduanera para pagar, dentro del plazo de quince días subsiguientes al secuestro, la participación mencionada.

Así mismo, queda facultado el Poder Ejecutivo para fijar el importe sobre el que se liquidará la participación a denunciantes y aprehensores, y para disponer la venta de las mercaderías secuestradas, por medio de los industriales y/o cámaras directamente afectados por el contrabando.

En los casos de infracciones y delitos calificados como contrabando se establece obligatoriamente la intervención policial, quedando reservada a la aduana únicamente la sustanciación del sumario administrativo, a los fines fiscales. La autoridad aduanera deberá comunicar dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, a la autoridad policial, a fin de que ésta, con la intervención judicial competente, instruya el sumario de prevención correspondiente.

Además, se le quitan al administrador las facultades que tenía de disponer la libertad o detención de las personas acusadas de contrabando, pues, de acuerdo con la modificación mencionada, será función de la autoridad policial.

Si fuera otra autoridad independiente de la aduana la que aprehendiere un contrabando, deberá comunicarlo de inmediato al administrador de la aduana a los efectos del sumario fis-

cal, pero además deberá comunicarlo a la autoridad policial para que instruya el sumario de prevención remitiéndole simultáneamente las personas que se hubieren detenido, y los efectos aprehendidos deberá enviarlos a la aduana respectiva.

Ahora corresponde considerar el artículo 10 del proyecto en revisión, que se refiere al impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, que fue puesto en vigencia en 1951 por el lapso de diez años. El proyecto de reformas que consideramos comienza, claro está, por prorrogar su aplicación por el término de otros diez años más a partir del 31 de diciembre de 1961, que fue cuando venció el término de vigencia. Excluye esa prórroga al caso de empresas unipersonales y sociedades de personas que a la fecha de publicación de la presente ley hayan cerrado sus balances, en cuyo caso su incorporación a este régimen se producirá con referencia a los ejercicios que se cierren a partir del 31 de diciembre de 1962, inclusive.

—Entra al recinto y ocupa una banca en el mismo el señor secretario de Estado de Hacienda, doctor Jorge Wehbe.

Sr. Bértora. — Originariamente este impuesto gravaba con el uno por ciento al capital y reservas libres de las sociedades de capital y el que estaba representado por acciones nominativas podía excluirse a solicitud de parte.

La reforma proyectada establece que quedan sujetos al pago de este impuesto, además de las sociedades de capital, las empresas unipersonales y las sociedades de personas, siempre que revistan tal carácter, a los efectos del impuesto a los réditos, matriculadas como comerciantes en las condiciones que establece el Código de Comercio.

La modificación, en síntesis, significará un seguro contra el alto costo por todo concepto de las transmisiones gratuitas, especialmente por causa de muerte, y seguramente será muy bien recibida por los contribuyentes.

En lo que respecta a las provincias, que por la legislación vigente están obligadas a derogar los gravámenes locales que incidan sobre la materia imponible de este impuesto, la reforma proyectada establece que será facultad de las mismas adherir al régimen del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, pero si lo hacen, quedarán obligadas a derogar los impuestos locales.

Lógico es que se prevea el caso de que alguna provincia no se adhiera, y queda establecido que se excluirán los bienes radicados económicamente en las provincias no adheridas.

El artículo 11 se refiere al impuesto a la transmisión gratuita de bienes, el que se reforma teniendo en cuenta las modificaciones que introduce el proyecto a la del impuesto sustitutivo al gravamen a la transmisión gratuita de bienes.

El artículo 13 establece que a partir del 1º de enero de 1962, la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto municipal a las actividades lucrativas pasará a manos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. A tal efecto, el proyecto en estudio faculta a la Dirección General Impositiva —que tiene actualmente a su cargo la percepción de dicho gravamen— a convenir con la municipalidad la forma y condiciones en que se concretará la transferencia.

Las disposiciones de la ley 11.683 y su decreto reglamentario siguen siendo de aplicación mientras la municipalidad no dicte nuevas normas al respecto, y el intendente municipal tendrá las mismas facultades que esta ley otorga al director de la Dirección General Impositiva.

El año pasado, por ley 15.799, se estableció que corresponderá a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la liquidación y percepción del impuesto de contribución territorial a partir del 1º de enero de 1963 y se suspendió el cobro de dicho gravamen por los años 1961 y 1962.

Por lo tanto, el impuesto de contribución inmobiliaria —anterior denominación— liquidado hasta el 31 de diciembre de 1960, será recaudado por la Dirección General Inmobiliaria.

Como es conveniente que la recaudación del impuesto correspondiente a los años 1960 y anteriores se realice lo antes posible, se justifica la reforma propuesta en el sentido de cancelar las deudas por contribución territorial y contribución inmobiliaria, sus recargos, intereses y multas correspondientes a ejercicios anteriores a 1952.

Así mismo, se condonan los recargos, intereses y multas por mora en el pago de la contribución inmobiliaria de los años 1952 a 1960, ambos años inclusive, siempre que los responsables paguen el gravamen adeudado antes del 1º de abril de 1962.

Los cobradores fiscales percibirán como única retribución el 10 % del impuesto que tuvieren en gestión de cobro y que se pague con motivo de esta modificación.

Por último, se exime del impuesto de contribución territorial y a partir del 1º de enero de 1961, a los inmuebles ubicados en zonas de jurisdicción nacional.

El artículo 17 del proyecto, condona las sumas adeudadas en concepto de impuesto a las ventas, sus accesorios, intereses y multas que le fueron aplicados al ex frigorífico nacional doctor Lisandro de la Torre, en períodos en que desarrolló actividades bajo dependencia oficial.

En la ley de impuesto para aprendizaje, comienza la modificación sustituyendo la denominación de impuesto para aprendizaje, por la de impuesto para educación técnica; y la mención Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, por la de Consejo Nacional de Educación Técnica, que es el nuevo nombre que lleva dicha institución.

El artículo 3º, que se deroga por el proyecto en estudio, establecía que el Poder Ejecutivo podía reducir hasta el 50 % de las alícuotas del impuesto, pero dicha reducción únicamente tendría lugar si el presupuesto de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, fuera tal, que el cálculo de recursos fuera suficiente con rebaja del impuesto.

Al artículo 4º de la ley, que es el que califica los establecimientos industriales, se le agrega un párrafo final que establece que comprenderán también los establecimientos en los que se efectúen trabajos de construcción, transformación, adaptación o reparación de cualquier clase de materiales o elementos elaborados o semielaborados.

Finalmente, se agrega un artículo nuevo que ordena a la Dirección General Impositiva transferir a la cuenta Fondo para Educación Técnica, orden Consejo Nacional de Educación Técnica, el producido del impuesto establecido por la presente ley.

Continúa el proyecto, elevando en el artículo 19, en un 100 % el adicional creado por el artículo 19 de la ley 15.273, destinado a financiar el plan de caminos de fomento agrícola, y facultando al Poder Ejecutivo para instituir un impuesto de hasta el 5 % sobre el precio básico a las rifas o sorteos privados que se autoricen. Se justifica tal facultad, dado que actualmente estas rifas y sorteos no se encuentran gravados ni contribuyen de manera alguna, no obstante la intervención, autorización y fiscalización que deben ejercer los organismos competentes dependientes del Poder Ejecutivo.

A partir de la vigencia de la presente ley se establece la inclusión del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dentro del régimen de coparticipación de la ley 14.788, fijándole una cuota del 0,04 % que será tomada de los fondos que le corresponden a la Nación.

Además, se aumenta hasta el importe de pesos 50.000, la multa máxima prevista en los casos de falsedad u omisión maliciosa en el suministro de informaciones para estadísticas, censos y/o investigaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos, eximiéndose en estos casos la actuación de los asesores letrados que dispone el artículo 23 de la ley 14.046.

El artículo 23 del proyecto cuya atención ocupa esta Honorable Cámara, dispone que en el caso de la constitución de sociedades de cualquier tipo, incluso las anónimas, formadas por empleados y obreros del Estado, que asuman la administración y explotación de servicios privatizados, quedarán exentas de todo impuesto que grave la constitución de tales sociedades.

Por último, se faculta al poder administrador, por el artículo 24, a fin de disponer un régimen orgánico, a ordenar las leyes impositivas con las modificaciones que le introduzca la presente.

Señor presidente: la Comisión de Presupuestos y Hacienda que presido, por mayoría ha dictaminado favorablemente por la aprobación —en todo su articulado— del proyecto tal como vino en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, cuyo ligero análisis he realizado abusando de la paciencia de la Cámara.

Como dije al comienzo, el proyecto constituye un intento feliz de adecuar la legislación impositiva vigente a la hora que estamos viviendo. Entendemos que, en líneas generales, las modificaciones impositivas no ejercerán una presión tributaria sobre el pueblo, sino que, al contrario, tal como lo hemos venido haciendo desde nuestra llegada al gobierno, año a año este Congreso ha ido, en la medida de lo posible —porque hay que conciliar lo ideal con lo posible—, estudiando las posibilidades de desgravación para llevar un alivio hacia la masa del pueblo, que es —en definitiva y por incidencia— la que abona todos los gravámenes que se establecen en las leyes.

Con estas palabras doy por terminado mi informe, y solicito el voto favorable de los señores senadores.

Sr. Losada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pérez Aznar). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — El dictamen que voy a informar involucra una disidencia parcial, porque no son muchas las discrepancias que tengo con el proyecto.

Razones de orden político, social y económico obligan al Estado al ejercicio de una actividad financiera a la que debe darle una orientación, después de determinar cuáles son los gastos y recursos. Esa política fiscal no debe perder de vista las llamadas economías pública y privada, pues en alguna medida una depende de la otra.

Tratamos hoy una nueva reforma impositiva. Nuestro partido ha dicho con claridad en la Honorable Cámara de Diputados cuál es nuestro pensamiento central en esta materia.

Ni el sector privado ni el estatal sabrán a qué atenerse en materia impositiva hasta tanto no se encare el problema con soluciones de fondo y en forma integral que contemplen aspectos fundamentales, pues lo que se viene haciendo es usar paliativos que en seguida pierden actualidad, complicando todo sin solucionar mucho.

Nosotros necesitamos una reforma impositiva que ordene la economía nacional sin perturbar la libre iniciativa de los sectores privados. Transferir fondos, llevando recursos no inflacionarios a la actividad productiva, nos parece lo fundamental. Nadie ignora que el país ha sufrido muchas reformas de carácter social pero ninguna de tipo económico. Eso nos hace perder la visión real de los hechos para dar una solución, pues es evidente que toda reforma social crea un beneficio que importa mayores gastos, o sea que la reforma económica de-

bió correr paralela a aquella, en el tiempo y en las posibilidades, y como eso no ocurrió se tuvo que echar mano al sistema impositivo aumentando muchas veces los gravámenes.

El radicalismo del pueblo es partidario de la desgravación. Creemos que en la inversión de nuestros ahorros, pequeños o grandes, estará el saldo positivo si realizamos la experiencia que tiene un antecedente en el famoso milagro alemán, pues hay economistas que aseguran que Alemania e Italia se negaron a seguir los consejos de gravar para salir del mal trance y buscaron la solución mediata y no la inmediata, y los hechos les dieron la razón. Esos países se recuperaron a través de los incentivos que daban sus gobiernos a quienes trabajaban y producían.

Yo a veces me pregunto si no estamos equivocados los propios legisladores al dictar una ley. La cargamos muchas veces de amenazas, como son, por ejemplo, las que involucran términos exigentes como la fijación de plazos de 15 días, como si quisiéramos colocar a todo el mundo al margen de las disposiciones legales. Eso amenaza y martiriza al hombre que trabaja, que honradamente quiere cumplir pero que vive traumatizado por la idea de «tal día vence tal cosa», «tal día hay que presentar tales papeles». Comprendo que una nación organizada tiene que proceder así, pero la gente que se organiza y tiene todo al día es precisamente la más pudiente. La otra se tiene que arreglar como puede. Y es a este sector del trabajo personal al que debe dirigir sus inquietudes el gobierno, tratando de que se haga justicia, haciendo pagar más al que más tiene y eliminar los impuestos indirectos, que no son justos porque hacen al consumo vital del hombre que trabaja. Obsérvese que de los 120.000 millones que se recaudan, 64.000 millones se obtienen por vía de los impuestos indirectos.

Yo he formulado solamente una disidencia parcial, porque fueron muchos los puntos coincidentes, señalados ya en la Cámara de Diputados por los representantes de la UCR del Pueblo. El Poder Ejecutivo, que tiene en sus manos todos los elementos necesarios, —pues cuenta con planillas y estadísticas actualizadas, conoce los consumos, dispone de organismos como la Dirección General Impositiva y la Dirección de Impuestos de la Secretaría de Hacienda—, que puede proyectar con datos precisos y técnicos especializados, es el que debe orientar estas leyes, sin que esto signifique seguir delegando facultades, como lo volvimos a hacer al entregar al Poder Ejecutivo, por vía del impuesto a las ventas, la facultad de disponer de 20.000 millones de pesos, y por vía de retenciones y recargos, de la suma de 28.000 millones. ¿Cuándo vamos a terminar con esta delegación de facultades?

Crear impuestos y no llevarlos a la actividad productiva es fundir al país. Por eso debemos canalizar el ahorro nacional y el trabajo del

hombre argentino para cumplir con una reforma que establezca. Debemos eliminar los cupos de exportación; debemos suprimir el impuesto nacional a las ventas en las operaciones de exportación; necesitamos con urgencia exportar nuestros productos e importar divisas. Cualquier política fiscal que entorpezca esta finalidad será conspirar contra nuestro desarrollo.

Al tratarse en particular el proyecto haré algunas observaciones. Para terminar, señor presidente, no quiero dejar de señalar la necesidad que existe de codificar el derecho tributario, pues hay en esta materia una gran confusión a raíz de que existen muchas leyes derogadas, y otras que no están en vigor. En este proyecto, por ejemplo, se modifican más de diez leyes que, a su vez, sufren 120 modificaciones. Todo esto, insisto, hace necesario un código que ilustre y aclare conceptos entre funcionarios, letrados y contribuyentes.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pérez Aznar). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Vicchi. — La consideración de esta ley por el Senado está condicionada por una serie de factores que hacen ineludible su sanción. El primero de ellos es que en el presupuesto se han previsto como recursos los ingresos que pueden ser proporcionados por esta ley. Es evidente que esta circunstancia nos obliga a sancionarla tal como viene de la Cámara de Diputados.

No es posible negarle al fisco en estos momentos un importante recurso, sobre todo los que hemos sostenido que la política de equilibrio del presupuesto es una de las orientaciones cardinales que debe tener toda buena administración.

Observo, eso sí, señor presidente, que se insiste en un viejo defecto de método, que consiste en la modificación y remiendos a las leyes en vigor, lo que hace complicado el sistema impositivo. Esperamos —creo que algo así anunció el señor secretario de Hacienda en la discusión de la Cámara de Diputados— que en alguna oportunidad se haga la reforma impositiva de fondo y en forma perfectamente coordinada.

He de votar el proyecto en general en forma favorable. Algunas de las graves deficiencias que tenía, tal como el embargo de los bienes del contribuyente y otras disposiciones, han sido eliminadas en el debate de Diputados, lo que, indudablemente, ha mejorado el dictamen.

En realidad, no voy a formular las observaciones con la ilusión de que ellas puedan ser tenidas en cuenta, por las circunstancias que ya he mencionado. Creo que el Senado, fatalmente, tendrá que sancionar la ley que ha venido en revisión, y las observaciones que formulo son —diré— más para salvar mi voto y mi punto de vista con respecto a algunos de los aspectos del proyecto. Observo en primer término que una de las faltas de organicidad que presenta nuestro régimen impositivo, y que se observa en

el proyecto, es el recurso de delegar en el Poder Ejecutivo o simplemente en la repartición administrativa, la facultad de determinar gravámenes. Esta delegación es inaceptable en nuestro régimen constitucional, ya que es evidente que la fijación de gravámenes y su determinación son facultades privativas del Congreso de la Nación.

Es éste uno de los inconvenientes más serios que se pueden señalar a la ley. Tal las disposiciones contenidas en el inciso 6º del artículo 1º, que sustituyen el artículo 28 de la ley 11.683, o aquellas contenidas en el capítulo de impuestos internos —inciso 5º del artículo 5º— por las que se faculta al Poder Ejecutivo a pasar a ad valorem las tasas específicas.

En el artículo 1º, relativo a la ley de procedimientos, se condiciona la «validez» de los escritos que presenten los contribuyentes formulando descargos u ofreciendo pruebas al cumplimiento de los requisitos que determina el decreto reglamentario.

En el punto 6º se autoriza a la dirección a fijar el monto de los anticipos, no tan sólo como hasta ahora, en forma proporcional al impuesto abonado en el año anterior, sino basándose en otros índices no enunciados en forma taxativa ni precisados en cuanto a la forma en que se aplicarán; esto significa que en la práctica la Dirección General Impositiva, por delegación del Congreso, podrá fijar el monto de anticipos que ella estime conveniente y sin limitación.

Otro ejemplo de delegación inaceptable —a mi juicio— es la del punto 24 del artículo 1º. La modificación propuesta dice así: «La aplicación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes se regirá por la presente ley con las limitaciones que establezca la reglamentación.» Es decir que se delega en forma incondicional a la reglamentación el alcance de la ley general de impuesto a la transmisión gratuita.

En igual sentido, y quizá más grave aún por las consecuencias fiscales que puede acarrear, la modificación a la ley de impuestos internos autoriza a transformar las tasas específicas en tasas ad valorem.

Otros casos de delegación de facultades propias del Poder Legislativo encontramos en el artículo 10, punto 4º, inciso c), del artículo 4º propuesto para el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita. También en el artículo 12 relativo a la ley a la transmisión gratuita de bienes, en el punto 1º, se establece, en resumidas cuentas, que la valuación especial quedará librada en su determinación a la Dirección General Impositiva, ya que ésta queda autorizada a disponer la forma en que se realice.

Un aspecto de la reforma proyectada que ha sido severamente criticado es el que establece recargos, con carácter de sanción penal, la que resulta no tan sólo de su monto, que es el 3 por ciento mensual, sino también de su propia naturaleza, reconocida en el punto 16 del artículo 1º, que dice que las sanciones del artículo

42 —recargos— no serán de aplicación en caso de fallecimiento del infractor, así como las otras penalidades de los artículos 43 y 45. Evidentemente, no se respeta aquí el principio ya clásico en nuestra legislación penal: *no bis in eadem*, es decir, no dos penas con respecto a un mismo hecho.

La publicidad prevista en el punto 11 del artículo 19 es también objetable y produce, con toda justicia, resistencia en nuestro ánimo, ya que no están lejos aquellos años en los que se recurría a cualquier procedimiento que facilitara la persecución política y coartara la libertad individual.

—Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, señor senador doctor José María Guido.

Sr. Vicchi. — Se ha hablado mucho en estos últimos tiempos de la usura y de los altísimos intereses, que dan la pauta de una cierta relación de las buenas costumbres. Sin embargo el fisco pretende obtener un interés del 3 % mensual desde la interposición de la demanda judicial, no tan sólo sobre el capital sino también sobre los recargos, multas y otros intereses que se adeudaren.

Entiendo, señor presidente, que cuando la jurisprudencia actual condena como contraria, a la moral y a las buenas costumbres toda estipulación de intereses superiores al 15 por ciento anual, es inadmisibles que el fisco pretenda un interés del 36 por ciento.

La Cámara de Diputados ha introducido modificaciones al proyecto en un tema que preocupa, con toda justicia, a una gran masa de población y que le concierne en forma directa: el impuesto a los réditos. El proyecto, tal como ha venido a consideración de esta Cámara, ha aumentado sustancialmente el mínimo no imponible, sus adicionales y las deducciones correspondientes. Entiendo que esas modificaciones son aconsejables, aunque, evidentemente, no se da con ello ninguna solución de fondo a la necesidad de capitalizar a los sectores productivos del país.

Debe tenerse en cuenta, además, que las cargas por aportes sociales son sumamente gravosas en nuestro país y que, para empleados y obreros, significan un drenaje muy importante en sus entradas. Los réditos están gravados en la actualidad mucho más fuertemente que hace unos años; diversas estadísticas han demostrado que el mínimo no imponible actual es, en su valor efectivo, inferior en más de un veinticinco por ciento al que regía en 1943, lo que implica que grandes sectores de la población que antes no pagaban impuesto a los réditos lo paguen en la actualidad; también las rentas imponibles están ahora gravadas en mucha mayor escala: en \$ 50.000 de renta imponible estaba gravada en 1943 con el 3 por ciento; en 1961, con el 16,5 por ciento; \$ 500.000 estaban

gravados en 1943 con el 4,7 por ciento, y en 1961, con el 39,5 por ciento.

El criterio fiscalista de las reformas proyectadas se evidencia en el artículo destinado al impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes, que, en virtud del nuevo artículo 6º proyectado, deja de ser sustitutivo para ser un mero impuesto al capital. Con la modificación introducida, que dice que «el pago del gravamen tiene carácter de definitivo, aunque a su vencimiento no se prorrogue la vigencia de esta ley», este impuesto juega algo así como si fuera un seguro contra el impuesto a la herencia por tiempo determinado. Contradice la propia esencia del impuesto sustitutivo el carácter de definitivo que se pretende darle, porque es evidente que este gravamen reconoce como causa-origen un hecho imponible: la transmisión a título gratuito. Y si este hecho imponible no se da durante el período de vigencia de la ley, es evidente que se ha pagado sin causa y, por elementales principios de derecho, hay lugar a su repetición, que en la ley vigente se reconoce por su acreditación a cuenta del que en definitiva correspondiere.

Merece también una seria meditación la aparición en la ley, como sujeto imponible, de la empresa o firma unipersonal. Es ésta una figura que no ha decantado en nuestro derecho y a la que se opone el principio del carácter universal del patrimonio. Se produce así una escisión patrimonial de una misma persona, cuyas consecuencias, en el orden legal impositivo, no se advierten suficientemente claras. En principio, considero inconveniente que el sistema tributario —aun reconociendo su autonomía científica— se aparte de principios fundamentales del derecho privado sin que se adviertan, prima facie, grandes ventajas que aconsejen esa desviación.

Además, esta reforma dificultará la adhesión de las provincias, ya que evidentemente restringirá mucho las posibilidades de ingreso a sus áreas locales de los impuestos a la transmisión de bienes.

En cuanto a los impuestos de sellos, en estos momentos en que se trata de favorecer la exportación como único medio de equilibrar nuestra balanza comercial, ¿por qué no se desgravan los seguros de exportación al igual que los de importación? En igual sentido, ¿por qué se grava en impuestos internos con medio punto más los seguros de exportación con relación a los de importación?

Dejo pues, así, fundado mi voto, que ha de ser favorable en general, con los reparos en particular que he señalado en esta breve exposición.

Sr. Secretario de Estado de Hacienda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Estado de Hacienda. — Diré breves palabras, señor presidente, para insistir

en el criterio del Poder Ejecutivo con respecto a esta reforma.

El Poder Ejecutivo ha sostenido y sostiene que no se trata o no es ésta una reforma de fondo, y que para que ésta se pueda realizar es necesario esperar lo que podríamos llamar una decantación en el proceso económico argentino en sus estructuras económicas que se encuentran en plena transformación.

No se podría realizar en este momento una reforma de fondo sin que hubiera necesidad de reverla dentro de poco tiempo en virtud de las transformaciones sustanciales que, como digo, se vienen operando con gran rapidez en la economía argentina. Por eso es que el Poder Ejecutivo entiende que ahora sólo procede una reforma circunstancial y que, por otra parte —y en esto creo que coincide el Poder Ejecutivo con todos los sectores de esta Honorable Cámara—, después vendrá la oportunidad de realizar una transformación sustancial, que deberá ser ampliamente discutida con la participación de todos los sectores de la vida argentina.

Quiero señalar, sí, para evitar equívocos, que esta reforma de ninguna manera implica aumento significativo de tributo alguno; por el contrario, hay desgravaciones, como en el caso del impuesto a los sellos —para citar uno al pasar— y de otros. Inclusive, la reforma introducida en la Honorable Cámara de Diputados, en cuanto eleva el mínimo no imponible, permite sostener también, sin lugar a dudas, que las desgravaciones son más importantes que algunos esporádicos aumentos que se registran.

No obstante, el Poder Ejecutivo no oculta que espera, con esta reforma, obtener recaudación mayor, pero esta mayor recaudación piensa lograrla mejorando la percepción, y precisamente en la reforma a la ley de procedimientos se encuentran varias cláusulas que permitirán a la Dirección General Impositiva una acción más eficaz para poder realizar inclusive lo que aquí se ha reclamado tanto: mejor justicia distributiva respecto a las cargas tributarias.

Entiendo, señor presidente, que el tema de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo ha sido muy debatido y, por otra parte, no es un hecho nuevo en la legislación tributaria argentina. En ocasión de la reforma a fondo de la misma podrá discutirse; pero quiero, eso sí, decir que no puede sostenerse lisa y llanamente su inconstitucionalidad, puesto que hay interpretaciones respecto de las mismas y un sector de la doctrina sostiene que ellas están amparadas por las mismas normas constitucionales. Podrá diferirse en esa interpretación; pero lo cierto es que no se da al respecto una opinión uniforme. En los Estados Unidos, por ejemplo, en materia aduanera se registran algunas de estas delegaciones; en el caso que ha citado el señor senador por Mendoza, de la facultad de la Dirección General Impositiva para establecer

anticipos con índices distintos a los de la última declaración jurada, tiene su explicación, que quiero dejar perfectamente aclarada. Se refiere fundamentalmente al decreto que ha establecido la obligación de pagar el anticipo de este impuesto en el caso de las importaciones en el momento del despacho a plaza. Este impuesto venía siendo burlado por algunos importadores esporádicos o que realizaban sucesivas importaciones a nombre de diversas sociedades, dejando de pagar. Se originaba así, por una parte, un daño al fisco, y por otra, una competencia desleal. Por ello se estableció la innovación de efectuar un anticipo con el despacho a plaza de las mercaderías. Pero como esta modificación podría ser cuestionada, se ha pedido establecerla por ley para amparar la reforma que se ha hecho por decreto.

Respecto de la transmisión gratuita de bienes, punto que fue aclarado en la discusión en la Cámara de Diputados, se trata de terminar con un régimen anacrónico. Puedo asegurar a esta Honorable Cámara que de ninguna manera estas modificaciones van a constituir una nueva carga o una dificultad para el contribuyente. Por el contrario, se trata de aplicar la ley 11.683 y evitar el procedimiento anacrónico de la ley respectiva, lo que va a permitir entre otras cosas, por ejemplo, posibilitar a los mismos profesionales que actúan en el foro, liquidar el impuesto bajo su propia responsabilidad, sin que esta liquidación deba ser realizada previamente por funcionarios de la Dirección General Impositiva, la cual podrá controlar a posteriori los casos más importantes y en forma de muestreo, con lo que se evita un trámite muy engorroso que considero es una de las mayores dificultades que encuentran los juicios sucesorios ante los tribunales.

Sr. Presidente (Guido). — Si ningún señor senador hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración en particular.

—Se lee el artículo 1º.

Sr. Losada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — En el punto a) se establece que la dirección sólo quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio cuando se trate de cambio a un domicilio real o legal, si la notificación de dicho cambio ha sido hecha por el contribuyente en la forma y condiciones que ella establezca. Yo creo que habría que suprimir esta frase: «en la forma y condiciones que ella establezca», porque me parece que la persona que cambia su domicilio comunica a la dirección que lo ha hecho y no tiene por qué saber en qué

condiciones debe hacerlo según la dirección. Es una cuestión de forma.

Sr. Secretario de Estado de Hacienda. — ¿Si me permite el señor senador?

En realidad esto tiene una gran importancia, puesto que las mayores dificultades con que se encuentra la Dirección Impositiva, al iniciar juicio contra los contribuyentes en mora, es lo que podríamos llamar la argucia que pueden éstos esgrimir en lo relativo a su domicilio. Se dan frecuentemente domicilios falsos o inexistentes; y en algunos casos, como ha ocurrido ahora, al comenzar la división de la jurisdicción de la Capital Federal en distintas secciones, muchos contribuyentes para escapar al control de la agencia respectiva, trasladaban su domicilio al centro, esperando con ello una mayor impunidad. Estas maniobras son frecuentes, de manera que resulta imprescindible permitir que la Dirección General Impositiva establezca condiciones respecto a la notificación del domicilio, condiciones que de todas maneras no podrán escapar a las condiciones generales que establece el derecho civil en la materia, o sea, que deberá tratarse de un domicilio real; residencia o lugar de trabajo, pero siempre un domicilio real.

Sr. Losada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Yo discrepo con el criterio que acaba de sustentar el señor secretario, porque evidentemente, nosotros no estamos legislando para los pillos o para la gente malintencionada, que si bien hay muchos, no es menos cierto que la gente honorable, que desconoce el sistema con que tiene que hacer la comunicación, la hace dando simplemente su nuevo domicilio y no tienen la obligación de saber cuál es la forma en que, según la Dirección Impositiva, debe hacer esa comunicación.

Sr. Secretario de Estado de Hacienda. — En realidad, la gente honrada no va a tener problema, porque es la que da siempre su domicilio real. Por otra parte, la legislación penal tiene por finalidad ocuparse del infractor a la norma. Esa es la esencia de la legislación penal, y esta disposición es, en algunos aspectos, de carácter penal. No habrá ninguna condición que establezca la Dirección Impositiva que impida dar su domicilio real a las personas que actúan de buena fe. Por eso creo que la preocupación del señor senador no se justifica.

Sr. Presidente (Guido). — ¿Insiste el señor senador por Misiones en su propuesta de modificación?

Sr. Losada. — Yo no insistiría, señor presidente, si tuviese la seguridad de que la dirección hará conocer a los contribuyentes la forma en que deberán dirigirse a ella.

Sr. Secretario de Estado de Hacienda. — Se le da amplia publicidad.

Sr. Bértora. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Bértora. — Estimo que la objeción del señor senador preopinante se refiere a una facultad reglamentaria inobjetable, y como las leyes o reglamentos deben presumirse conocidos por todos, es evidente que el contribuyente que acostumbra abonar el impuesto debe saber también cuál es la forma de comunicar su domicilio. La dificultad puede presentarse con el domicilio especial, en que se establece un domicilio que no es el propio y que a veces no entraña sino una argucia —con el cambio sucesivo de domicilios especiales— para dificultar las notificaciones o emplazamientos efectuados por el organismo recaudador. Al variar el domicilio varía también la delegación o agencia encargada del trámite, y el pase de una a otra para cumplir el cometido es un recurso dilatorio de que se valen los malos pagadores.

De manera que no veo por qué se ha de pensar que la Dirección Impositiva va a establecer sistemas que sean trampas para perjudicar a la gente honrada. Por el contrario, hay que proporcionar los elementos y procedimientos dúctiles y ágiles para que no sean evadidas las contribuciones. El mal del país consiste en eso, no en que los impuestos sean altos o bajos, sino en que hay gente que no paga. Entonces se necesitan los elementos para llevar a los remisos y a los contumaces a abonar lo que les corresponde, para que la carga de impuestos y contribuciones se distribuya en la forma que lo quiere el legislador.

Sr. Presidente (Guido). — ¿La comisión no acepta la modificación que propone el señor senador por Misiones?

Sr. Bértora. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar el artículo 1º tal como figura en el dictamen de la comisión.

—Se lee el artículo 1º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se aprueban los artículos 2º a 21, inclusive.

—Al enunciarse el artículo 22, dice el

Sr. Losada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Aquí también tengo que formular una observación en la parte que dice que el aviso de retorno servirá de suficiente prueba de las notificaciones siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente, aunque aparezca suscrito por un tercero.

Sr. Bértora. — ¿Se refiere al artículo 22 del proyecto de Diputados? El artículo 22 del dictamen de la comisión se refiere a otra cuestión.

Sr. Losada. — Me refiero al artículo 22 del proyecto que tengo sobre mi banca, que es el que me han entregado.

Sr. Bértora. — El señor senador se está refiriendo al inciso 22 del artículo 1º, que ya ha sido votado.

Sr. Losada. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Guido). — ¿El señor senador solicita reconsideración de la votación?

Sr. Losada. — Quería proponer simplemente el agregado de la palabra «identificado», porque dice que es suficiente que el aviso de retorno haya sido suscrito por un tercero, y si no se lo identifica se pueden presentar inconvenientes si el que recibe la correspondencia no es el destinatario.

Sr. Presidente (Guido). — A esta altura de la votación su moción significa un pedido de reconsideración para ser tratado al final.

Sr. Losada. — Sí, señor presidente, un pedido de reconsideración con respecto al inciso 22, acápites a) y b), en el que voy a proponer un agregado que dice: «a su ruego un testigo identificado».

Sr. Presidente (Guido). — En consideración el artículo 22. Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones se votan y aprueban los restantes artículos del proyecto.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor senador por Misiones, con respecto al apartado 22 del artículo 1º.

Sr. Losada. — En la parte que dice: «el aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente, aunque aparezca suscrita por un tercero», yo solicito que el mencionado tercero sea identificado.

Sr. Bértora. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Bértora. — En la inteligencia de que reconsiderar es volver a considerar un asunto, estoy de acuerdo con que se reanude la discusión en este aspecto para satisfacción de los señores senadores y en especial del colega que formula la cuestión. Pero me voy a oponer oportunamente a que se modifique. De manera que estoy de acuerdo en que se reconsidere y analicemos la preocupación del señor senador para tratar de demostrar a mi juicio que incurrir en un grave error, pues agregar lo que él establece configura una perturbación importante en materia de administración impositiva.

Sr. Presidente (Guido). — ¿El señor senador por Entre Ríos apoya la moción de reconsideración del señor senador por Misiones?

Sr. Bértora. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guido). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor senador por Misiones.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración.

Sr. Bértora. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Bértora. — La disposición de este apartado del artículo 1º que consideramos, al establecer un sistema de notificación en la forma en que lo hace, ha querido, justamente, ponerse a cubierto del mal contribuyente, de la persona que se quiere valer de argucias de tipo legal para eludir las responsabilidades que tiene como contribuyente.

Si estableciéramos la identificación de la persona que aparece en un zaguán cuando llega el distribuidor de la correspondencia con una carta certificada con aviso de retorno, o la del testigo, crearíamos tal traba a la distribución de la correspondencia que francamente se tornaría casi ilusorio este sistema. La verdad es que cuando uno tiene un domicilio, hay que suponer que quien recibe la correspondencia no es un extraño que pasa por la vereda, sino una persona de la familia o del servicio doméstico. Hay que legislar por lo que es natural y corriente y no para una rara excepción que linda en lo delictual.

Por otra parte, ya sabemos qué ocurre con las intimaciones: nunca le acarrear al contribuyente un perjuicio irreparable, cuando se trata de una primera notificación. La Dirección Impositiva actúa siempre con un gran propósito de persuasión, de contemplación; de tal manera que va a ser raro que a una primera intimación no siga una segunda por este procedimiento, y hay que suponer que alguna de las cartas dirigidas al contribuyente habrá de llegar a destino.

Quiero señalar, además, que estas disposiciones se colocan justamente como una reacción de las autoridades frente al mal contribuyente. No podemos proteger a quien no quiere pagar, y cuya contumacia determina una mayor carga fiscal para los demás.

Por ello creo que aquí no existe ningún perjuicio, sino que, al contrario, es un procedimiento ágil que posibilita que el contribuyente no eluda las intimaciones o los requerimientos de la Dirección Impositiva. Todo el mundo lo dice; todos los sectores reconocen que aún, pese a todas las medidas adoptadas, se sigue eludiendo el pago de los impuestos, razón por la cual, ineludiblemente, tenemos que sancionar disposiciones legales que posibiliten que el remiso concorra a abonar lo que le corresponde, y no se escude en argucias que, precisamente por conocidas, nos proponemos evitar.

Por ese motivo la mayoría de la comisión no acepta el agregado propuesto por el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Yo le agradezco al señor senador, porque todo lo que ha expresado afirma mi tesis. Justamente lo que deseo es que sea responsable la persona que firma al recibir la correspondencia, porque de lo contrario, puede ocurrir lo que dice el señor senador: que una persona irresponsable diga después «yo no firmé eso». Por esa circunstancia quería la identificación y precisamente el señor senador me ha dado el argumento. De todos modos no deseo hacer una cuestión fundamental de este aspecto. Quería aclarar justamente ese hecho.

Sr. Secretario de Estado de Hacienda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Estado de Hacienda. — Este aspecto se discutió mucho en la Honorable Cámara de Diputados. Evidentemente la ley establece una presunción de validez de la notificación. Pero quería hacer notar que ésta es correspondencia que será distribuida por los carteros.

El señor diputado Adrogué, entre otros, hizo hincapié en la identificación, pero resulta imposible pretender que los carteros identifiquen a la persona a quien han entregado la correspondencia.

Sr. Presidente (Guido). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo apartado del inciso a) del punto 22 del artículo 1º del dictamen, tal como fue despachado por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guido). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se hará la comunicación respectiva al Poder Ejecutivo.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

—Es la hora 21 y 5.

ENRIQUE DILLON.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

11

APENDICE

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1

Modificación del artículo 3º de la ley 11.662

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 3140.

2

Donación de una fracción de terreno al Club Atlético Estudiantes, de la Capital Federal

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 3147.

3

Subsidio al Aeroclub de Río Gallegos

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 3148.

4

Subsidio a los clubes deportivos Boxing e Hispano-Americano, de Río Gallegos

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 3149.

5

Modificación del artículo 9º del Estatuto del Docente

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 3150.

6

Reformas al régimen impositivo

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en las páginas 3151 al 3165.